

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES se le reconoce personería a UNIÓN TEMPORAL FUERZA LEGAL TÉCNICA, representada legalmente por la señora ALEJANDRA YANETH HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA identificada con cédula de ciudadanía 21.475.628 y tarjeta profesional 233.946 del Consejo Superior de la Judicatura, y por sustitución de ésta se le reconoce personería a la doctora ANA MARÍA VÉLEZ RESTREPO identificada con cédula de ciudadanía 43.601.322 y tarjeta profesional 105.294 del Consejo Superior de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310500120170080701, promovido por el señor **HERNÁN JAIME ECHEVERRY ARROYAVE**, contra **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y la **UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte

demandante y por la apoderada de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA, frente a la sentencia emitida el 18 de febrero de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **059**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, solicita el demandante, se reconozca que es beneficiario del régimen de transición; además de esto, se declare que la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA debe pagar a COLPENSIONES las cotizaciones a la seguridad social por todo el tiempo laborado, mediante un cálculo actuarial. Además, deprecia que COLPENSIONES proceda a corregir la historia laboral, a su vez, reconozca el tiempo cotizado en el sector público. Finalmente, solicita el reconocimiento de la pensión de vejez al demandante de conformidad al Acuerdo 049 de 1990, y su correspondiente retroactivo desde el 31 de diciembre de 2003. De manera subsidiaria, solicita se reconozca la pensión de acuerdo a lo establecido en la Ley 797 de 2003.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que nació el 25 de febrero de 1942; que durante su vida laboral, prestó sus en entidades públicas y privadas de la siguiente manera: fiscalía general de la nación del 27 de marzo de 1968 hasta el 15 de septiembre de 1969; como Juez de la república desde el 17 de septiembre de 1969 hasta el 30 de marzo de 1970; con el municipio de Medellín desde el 26 de septiembre de 1971 hasta el 5 de agosto de 1973 y otro período desde el 16 de octubre de 1974 hasta el 5 de octubre de 1975; en el politécnico Jaime Isaza

Cadavid desde el 10 de febrero de 1976 hasta el 26 de diciembre de 1976, y otro período desde el 2 de febrero de 1977 hasta el 20 de diciembre de 1977. Sumadas todas estas semanas arroja 370,571 semanas. Adicional, indica que trabajó como defensor público, cotizando de manera independiente desde el 1 de noviembre del año 1995 hasta el año 2003, pero estos periodos deben ser corregidos por parte de la administradora.

Menciona que además de trabajar para estas entidades ya antes aludidas, laboró de en la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA así: 2 semestres en el año de 1979 como docente de cátedra; 1 semestre en el año de 1980; también 2 semestre en el año de 1984; igualmente 1 semestre en el año de 1985. En el mismo sentido, informa que, en dicha institución, fue asesor jurídico desde el 30 de noviembre de 1982 hasta el 31 de septiembre de 1987, pero dicho empleador nunca pagó sus aportes a seguridad social, desconociendo 326 semanas.

Se expone que una vez sumadas las semanas, arroja 1.021,99 semanas cotizadas; que es beneficiario del régimen de transición, por lo que se le debe aplicar lo consagrado en el Acuerdo 049 de 1990; cuenta que solicitó ante el entonces ISS el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual fue negada bajo el argumento que no se encontraba afiliado al sistema al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, lo cual no es correcto, pues no es un requisito establecido por el artículo 36 de la ley 100 de 1993 ni por el artículo 12 del decreto 758 de 1990.

Por otro lado, dice que al 31 de diciembre de 2003, también se han cumplido los requisitos exigidos por el régimen general de pensiones, que para dicho año serían 1000 semanas de cotización y 60 años, en tal sentido, este tiene derecho a la pensión en dos regímenes pensionales diferentes. Finalmente, afirma con la solicitud elevada a la AFP accionada, se entiende agotada la reclamación administrativa.

Admitida la demanda y notificadas las accionadas, éstas contestaron de la siguiente manera:

COLPENSIONES solo aceptó la edad del demandante, y que se elevó solicitud de pensión, y con relación a los demás hechos, indicó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y formuló las excepciones que denominó *“Inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez solicitada”, “ausencia de causa para pedir”, “prescripción”, “compensación” e “Imposibilidad de condena en costas”*.

Por su parte, la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA solo admitió la edad del demandante, pues los demás hechos no son ciertos, o no hay constancia de ellos. Se opuso a las pretensiones, y formuló las excepciones *“Inexistencia de la obligación de afiliación y pago de aportes” y “cobro de lo no debido”*.

En sentencia del dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada la excepción de *“inexistencia de reconocer la pensión de vejez”* interpuesta COLPENSIONES, absolviéndola de todas las pretensiones incoadas en su contra. Por otro lado, declara que se existieron 6 contratos de trabajo entre el señor JAIME ECHEVERRY ARROYAVE y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, cada uno de ellos equivalente a 16 semanas. Adicional, ordenó a COLPENSIONES a liquidar el cálculo actuarial en favor de JAIME ECHEVERRY ARROYAVE, con el fin que la UNIVERSIDAD COOPERATIVA proceda con el pago. Finalmente se condena en costas a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA.

APELACIÓN

El apoderado de la parte demandante apeló la decisión, exponiendo su inconformidad en tres puntos: el primero de ellos, por cuanto la Ley 100 de 1993 la ley 100 de 1993, respecto al régimen de transición, establece que para ser beneficiario de este régimen, para el caso de los hombres, debían tener 40 años al momento de la entrada en vigor de dicha ley, lo cual acreditó el señor Hernán Echeverri, quien tenía 52 años; argumenta también que no puede haber

interpretaciones ambiguas ni requisitos adicionales, como lo es, estar afiliado al ISS para ese momento.

En segundo lugar, cuestiona la interpretación de la relación laboral con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, considerando un error no incluir el contrato de asesoría jurídica en la condena, pues con la documental arrimada, se pudo establecer claramente la existencia de éste. Por ello, solicita que se revoque la sentencia ordenando a la Universidad demandada a pagar cálculo actuarial sobre los semestres en los que el señor ECHEVERRI ARROYAVE ejerció como asesor jurídico.

Como tercer punto, expuso su desacuerdo con que se limitara el tiempo para presentar alegatos finales, y que no se decretara de oficio el interrogatorio de parte, pues a su juicio, esto limitó la capacidad de presentar pruebas adecuadas.

Por otro lado, la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA también impugnó la decisión, solicitando se revoque la sentencia, bajo el siempre existió una vinculación de prestación de servicios, autónomos e independientes como profesional, siendo así, contratista de la universidad como docente hora catedra sin tener un carácter laboral. Sin embargo, sea del caso señalar que, mediante auto del 18 de noviembre de 2020, se admitió el desistimiento del recurso presentado por la apoderada judicial.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de COLPENSIONES arrima alegatos de conclusión, indicando que lo pretendido por la parte demandante, es que la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, efectúe la afiliación y posterior pago de las cotizaciones, esto por el periodo del término de la relación laboral, situación que determinaría su derecho a la pensión de vejez en los términos del régimen de transición.

Por tanto, el empleador quien debe efectuar los pagos al sistema pensional, tomando en cuenta el monto devengado por el demandante, y COLPENSIONES solo se ve obligada a efectuar el cálculo del título pensional con sus respectivos intereses moratorios y recibir los aportes en favor del demandante, con anterioridad al reconocimiento de la pensión de vejez, por lo cual, se deberá absolver de costas procesales si se condena a la codemandada.

PROBLEMA JURÍDICO

De acuerdo al recurso presentado por el apoderado de la parte demandante, y toda vez que el presente proceso se conoce en grado jurisdiccional de consulta, son diversos los problemas jurídicos que se deberán analizar. El primero de ellos, es determinar si los contratos como docente de cátedra suscritos entre el demandante y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, constituyen una verdadera relación laboral; además de ello, se estudiará si entre las partes, existió un vínculo laboral entre los años 1983 y 1987; y finalmente, se establecerá si demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ello con el fin de acceder a la pensión de vejez al amparo del Decreto 758 de 1990.

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

En virtud del principio de la carga de la prueba o auto responsabilidad, consagrado en el artículo 164 y 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Es así como las partes están obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman, manteniendo la obligación de aportar los soportes en que se basan sus afirmaciones, con las cuales pretenden se les reconozca un derecho, la aplicación de una norma, o un efecto jurídico particular, el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

En desarrollo de tales preceptos normativos, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de octubre de 2011, radicado 37547 sostuvo:

“...La Sala considera que el Tribunal no distorsionó el verdadero sentido de la regla de juicio de la carga de la prueba, contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto de la materia-, porque la carga de la prueba del tiempo servido por el trabajador al empleador la soporta el primero, de modo que la falta de demostración del tiempo de servicios comporta que no hay posibilidad para condenar al pago de prestaciones, salarios e indemnizaciones...”.

Examinada la prueba documental que reposa en el expediente, la Sala encuentra:

- Que el señor HERNÁN JAIME ECHEVERRY ARROYAVE nació el 25 de febrero de 1942.
- La UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA certificó que el señor ECHEVERRY ARROYAVE prestó sus servicios como docente de cátedra en los siguientes períodos: 1-1979, 2-1979, 1-1980, 1-1984, 2-1984, y 1-1985.
- En el mismo sentido, la citada universidad certificó que, entre el 30 de noviembre de 1982 y septiembre de 1987, el demandante se desempeñó como asesor jurídico, realizando a su vez funciones administrativas.

Así las cosas, y en procura de analizar las relaciones laborales deprecadas en la demanda, resulta oportuno aclarar, que son dos las figuras contractuales a considerar, las que se presentaron en períodos diferentes, motivo por el cual, con el fin de llevar un hilo conductor, se analizarán los problemas jurídicos de la siguiente manera:

DOCENTE DE CÁTEDRA.

Sea lo primero señalar, que el asunto ha sido regulado por diversas normatividades, rememorando el Decreto 128 de 1977, el cual fuera derogado por Decreto 2277 de 1979, sin embargo, para la fecha de lo debatido en el presente caso, se analiza con mayor profundidad el Decreto 080 de 1980 “*Por el*

cual se organiza el sistema de educación post-secundaria”, normatividad que en sus artículos 93 y 98 indicaba lo siguiente:

“ARTÍCULO 93 (sic). Los docentes son de tiempo completo, de tiempo parcial o de cátedra. Es docente de tiempo completo quien dedica la totalidad de la jornada laboral, que es de cuarenta horas semanales al servicio de la institución a la cual se haya vinculado. Cuando la dedicación es entre quince y veinticinco horas semanales, el docente es de tiempo parcial. Quien dicte en la institución menos de diez horas semanales de cátedra o lectiva es, en todos los casos, docente de cátedra.”

...

“ARTÍCULO 98 (sic). Los docentes de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales y su vinculación a la institución se hará mediante un contrato administrativo de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos. Su remuneración se determinará según su categoría en el escalafón, si la tiene, y con base en las horas efectivamente dictadas.

Sus prestaciones sociales serán proporcionales a las establecidas para los docentes de tiempo completo.

Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas a las que se acostumbran entre particulares. El régimen de estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato deberá darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en este decreto.

Los contratos de que aquí se trata requieren para su perfeccionamiento, el registro presupuestal correspondiente.”

Normatividad que posteriormente, fue derogada por la Ley 30 de 1992, la cual, en sus artículos 71 y 73 dispuso situaciones similares:

“ARTÍCULO 71. *Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra.*

La dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de cuarenta horas laborales semanales.”

...

“ARTÍCULO 73. *Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales”*

Resuelta además importante, recordar que la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, en diversas oportunidades se ha pronunciado sobre el particular, trayendo a colación un aparte de lo dispuesto en la sentencia SL3126-2021, donde se indicó:

“De modo que es totalmente factible que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Sin embargo, dichas acciones no pueden en modo alguno desbordar su finalidad al punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo (CSJ SL2885-2019). Precisamente, en esta decisión la Corte asentó:

(...) el contrato de prestación de servicios se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo que lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades. Pero que, no obstante, en este tipo de contratación no está vedado de la generación de instrucciones, de manera que es viable que en función de una adecuada coordinación se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad a punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo.

En ese sentido, la Corporación ha precisado que corresponde analizar las particularidades fácticas de cada caso a fin de establecer si están acreditados los elementos configurativos de la subordinación, y para ello es esencial el análisis de la naturaleza de la labor y el conjunto de circunstancias en que esta se desarrolla (CSJ SL, 22 jul. 2009, rad. 35201 y CSJ SL2885-2019).

*Esto es sumamente relevante en el caso de los docentes de hora cátedra, **pues la jurisprudencia de la Corte ha adocrinado de forma pacífica y uniforme que «es de la esencia de la contratación de los servicios de enseñanza de docentes hora cátedra que su trabajo sea subordinado»** (CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 38182), esto sumado a estrictas pautas legales y jurisprudenciales que imperativamente **determinan la vinculación de aquellos por contrato de trabajo**, salvo casos excepcionales en los que ello puede darse a través de contratos civiles de prestación de servicios, aspecto sobre el cual se profundizará posteriormente.”* (Negrita intencional)

Posición ratificada en la SL888-2023.

Ahora bien, a juicio de esta Colegiatura, lo anterior deberá aplicarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 24 del CST, el cual reza: *“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”*

Pues bien, de acuerdo a las normatividades y jurisprudencia señaladas, considera esta Sala de Decisión que, la contratación de los docentes hora cátedra, se presume mediante la existencia de una relación laboral, correspondiendo al

empleador desvirtuar dicha presunción, demostrando en juicio la inexistencia de subordinación, y por el contrario, acreditando la independencia de quien se afirma ser un contratista, esto es, autonomía para ejecutar la labor convenida con el contratante.

Descendiendo al *sub lite*, y como elementos probatorios relevantes para el asunto en particular, se observa que la parte demandante arrima dos certificaciones expedidas por la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, donde se indica lo siguiente:

Cordial Saludo,

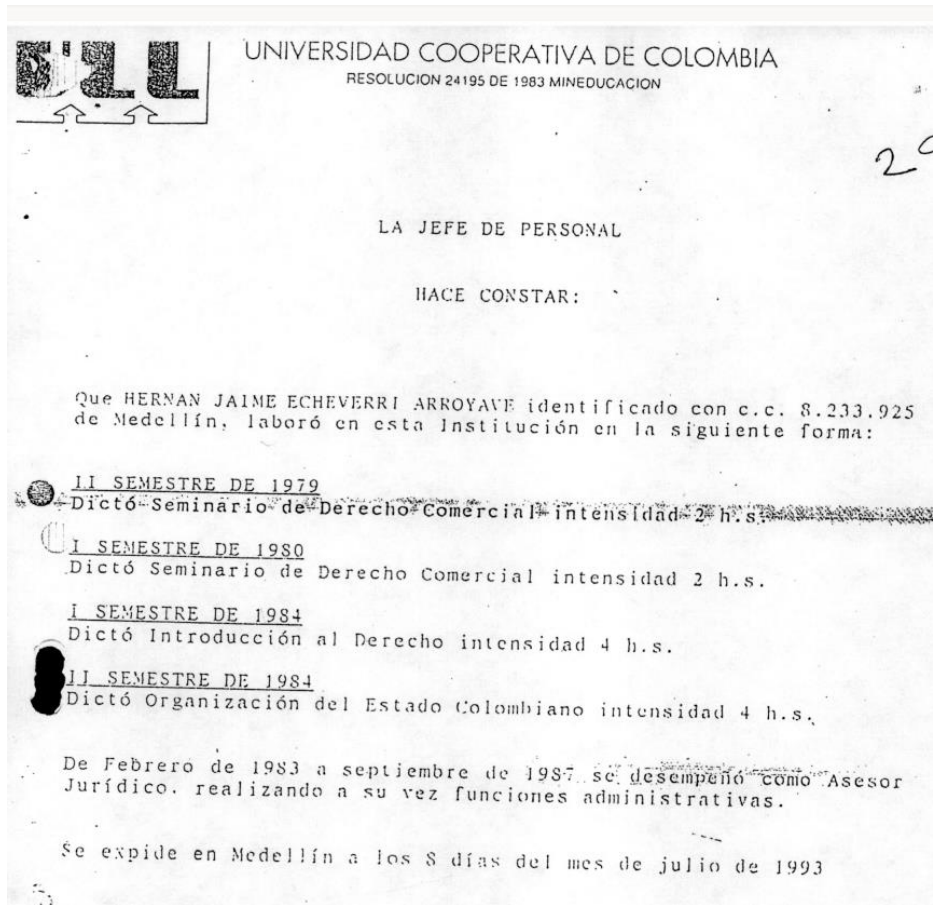
Acuso recibo del comunicado en referencia, radicado en la sede Medellín, mediante el cual solicita información laboral y constancias de aportes a la seguridad social realizados a Usted en virtud de un presunto vínculo laboral con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, frente a lo cual me permito indicar lo siguiente:

Verificadas las diferentes bases de datos con las que cuenta la Institución, encontramos que, entre Usted y la Universidad, existieron las siguientes relaciones contractuales como docente de catedra:

- Semestre académico 1 de 1979: periodo en el cual se desempeñó como docente catedrático, con una carga académica de 6 horas mensuales, con compensación de **CIENTO CINCO PESOS M/L (\$105,00)** por Hora Catedra.
- Semestre académico 2 de 1979: periodo en el cual se desempeñó como docente catedrático, con una carga académica de 18 horas mensuales, con una compensación de **CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L (\$127,05)** por Hora Catedra.
- Semestre académico 1 de 1980: periodo en el cual se desempeñó como docente catedrático, con una carga académica de 32 horas mensuales, con una compensación de **CIENTO VEINTISIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L (\$127,05)** por Hora Catedra.
- Semestre académico 1 de 1984: periodo en el cual se desempeñó como docente catedrático, con una carga académica de 16 horas mensuales, con una compensación de **CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/L (\$470.00)** por Hora Catedra.
- Semestre académico 2 de 1984: periodo en el cual se desempeñó como docente catedrático, con una carga académica de 16 horas mensuales, con una compensación de **CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/L (\$470.00)** por Hora Catedra.
- Semestre académico 1 de 1985: periodo en el cual se desempeñó como docente catedrático, con una carga académica de 10 horas mensuales, con una compensación de **CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/L (\$470.00)** por Hora Catedra.

Se pudo establecer que durante la vigencia de los mencionados contratos no se le realizaron descuentos a seguridad social, en consecuencia, no es posible acceder a su pretensión de aporte de comprobantes.

En los anteriores términos damos por atendida su petición.



Además de ello, y como testigo traído a juicio por la entidad codemandada UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, se recibió la declaración de la señora MARTHA LUCÍA ARANGO GAVIRIA, quien contó haber sido la directora administrativa de la Cooperativa de Colombia desde el año 1998 hasta el año 2015; que no conoce al demandante, pero según la información que reposa en los libros de la entidad, éste fue docente de cátedra, bajo la modalidad de prestación de servicios, para esa época, regía el decreto 80 del 80, señalando además que el señor ECHEVERRY ARROYAVE no tuvo contrato laboral, pues nunca fue empleado de planta. También depuso que el demandante solicitó una certificación, y para responderla, se constató que el accionante prestó los servicios desde 1884 hasta el 1997.

Del acervo probatorio mencionado, se colige sin lugar a hesitación, la prestación personal del servicio por parte del demandante a favor de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, sin embargo, y de acuerdo a la oposición presentada por esta codemandada, es necesario analizar si dichos servicios, se

surtieron a través de un contrato de trabajo, o mediante un contrato civil de prestación de servicios.

No se desconoce que la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA en el recurso de alzada, afirma categóricamente que cada uno de los vínculos existentes con el accionante, obedecieron a diversos contratos de prestación de servicios, pues el señor ECHEVERRI ARROYAVE contaba con plena independencia para prestar el servicio, empero, como se explicó previamente, la simple afirmación no resulta suficiente para desacreditar la presunción legal de un verdadero vínculo laboral, debiendo arrimar al plenario, material contundente para generar en el juzgador un convencimiento suficiente sobre la inexistencia de la subordinación, lo cual claramente no aconteció, pues ciertamente la actividad probatoria se denotó escueta, limitándose a la declaración de una ciudadana que ni siquiera fue testigo directo de las circunstancias de tiempo modo y lugar para el momento de los hechos, pues como ella mismo lo expuso en su deponencia, sus dichos se encuentran restringidos a la información que reposa en los libros de la entidad, pues el poco conocimiento que tiene al respecto, se debe a la vinculación que tuvo con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA como directora administrativa, la cual inició en el año 1998, esto es, con posterioridad a los extremos temporales alegados.

En este orden de ideas, estima éste juzgador plural que, tal como lo adoctrinó el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, al no haberse demostrado que la prestación personal del servicio por parte del señor HERNÁN JAIME ECHEVERRY ARROYAVE se produjo con total independencia para la ejecución de las funciones, opera de plano la presunción establecida en el artículo 24 del CST, y en tal sentido, se colige la existencia de una verdadera relación laboral.

Así las cosas, en este asunto puntual, se CONFIRMARÁ la sentencia de primer grado.

En otro orden de ideas, y pese no haber sido objeto de apelación por la parte actora, resulta necesario examinar una serie de situaciones concomitantes, las cuales, pueden incidir eventualmente en el reconocimiento de una prestación económica, tal como se analizará más adelante. Ello, en vista de conocerse también el asunto en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES.

Aclarado lo anterior, sea del caso mencionar en cuanto a los extremos temporales, que la Sala de Casación Laboral ha desarrollado el tema, y en sentencia SL2799-2020 indicó lo siguiente:

“Pues bien, en relación con el primer asunto, es preciso señalar que, en el caso de los profesores de hora cátedra vinculados a instituciones privadas de educación superior y con baja intensidad horaria, la jurisprudencia de esta Corporación ha estimado que no es razonable, ni proporcional que estas coticen por el año escolar, asumiendo una carga patrimonial adicional que no les corresponde, sino que su obligación abarca exclusivamente el tiempo de duración de la relación laboral, es decir, el lapso efectivamente laborado, y de acuerdo con la remuneración percibida (CSJ SL361-2018); en otros términos, en dichos eventos las instituciones deben solo efectuar los aportes por el período académico pactado. Lo anterior, en atención a que los docentes así vinculados tienen disponibilidad para el ejercicio de otras actividades o para efectuar labores de forma independiente.

De modo que, a juicio de la Sala, las instituciones de educación superior no están obligadas a mantener la afiliación de los profesores de hora cátedra durante los interregnos o períodos intersemestrales en los que no existe relación laboral o contrato de trabajo, los cuales coinciden generalmente con los tiempos de vacaciones de la actividad escolar universitaria, pues ello implicaría atribuirles una obligación económica sin sustento en la prestación efectiva del servicio.”

Teniendo en cuenta lo anterior, e insistiendo que dicho ítem no fue objeto de apelación por la parte actora, esta Colegiatura no encuentra reparo en la decisión adoptada por la *A quo*, en cuanto se estableció la existencia de diversos contratos laborales, correspondientes a cada período académico, cuyos extremos temporales oscilaron de la siguiente manera:

1 de marzo al 30 de junio de 1979

1 de agosto al 30 de noviembre de 1979

1 de marzo al 30 de junio de 1980

1 de marzo al 30 de junio de 1984

1 de agosto al 30 de noviembre de 1984

1 de marzo al 30 de junio de 1985

Así las cosas, esta decisión también se CONFIRMA.

En lo relativo los salarios percibidos por el demandante, se recuerda que la juez de instancia dispuso que teniendo en cuenta las horas laboradas, los salarios serían los siguientes:

1 período de 1979: \$630

2 período de 1979: \$2.287

1 período de 1980: \$4.066

1 período de 1984: \$7.520

2 período de 1984: \$7.520

1 período de 1985: \$4.700

Empero, en la mentada sentencia SL2799-2020, de igual manera se analizó lo relativo:

“Ahora, respecto del segundo asunto, como lo aduce la censura, la Corte advierte que es equivocada la conclusión del juez plural en cuanto a que la cotización de los profesores hora cátedra al sistema de seguridad social debe hacerse conforme al número de horas laboradas, pues desconoció la regulación de seguridad social para este tipo de vinculaciones y, además, pasó por alto postulados de la Constitución Política de 1991, tales como el principio de igualdad -artículo 13- y el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas -artículo 25-, de modo que en dichos casos el pago de cotizaciones debe hacerse por la totalidad del periodo académico, así el docente labore por horas y no devengue un salario mínimo legal mensual vigente.”

...

“Conforme lo anterior, en el caso de los profesores de hora cátedra, cuya vinculación debe hacerse imperativamente a través de contrato de trabajo con las instituciones universitarias por el periodo académico (CC C-006-1996 y C-517-1999), los aportes deben realizarse por dicho tiempo mes a mes y sobre una base no inferior al salario mínimo legal mensual vigente, pues, se reitera, independientemente de que no presten servicios en una jornada completa de trabajo, lo cierto es que no están exonerados por la ley para efectuar los aportes sobre esas condiciones mínimas previstas por el legislador.” (Negrita intencional)

Jurisprudencia que además, se encuentra en plena armonía con el artículo 145 del CST, y los artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993.

Es así como este órgano colegiado, no comparte los valores establecidos por la juez de primera instancia, pues éstos resultan ser inferiores al salario mínimo de la época, razón por la cual, se MODIFICARÁ la decisión en el entendido que la remuneración percibida por el accionante corresponde a los siguientes valores:

- 1 de marzo al 30 de junio de 1979: \$3.450
- 1 de agosto al 30 de noviembre de 1979: \$3.450
- 1 de marzo al 30 de junio de 1980: \$4.500
- 1 de marzo al 30 de junio de 1984: \$11.298
- 1 de agosto al 30 de noviembre de 1984: \$11.298
- 1 de marzo al 30 de junio de 1985: \$13.558

CONTRATO REALIDAD – PROFESIÓN LIBERAL

El extremo procesal activo, desde la presentación de la demanda, arguye que además de los contratos de trabajo ya analizados por hora catedra, existió otro vínculo laboral entre el señor HERNÁN JAIME ECHEVERRY ARROYAVE y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA desde el 30 de noviembre de 1982 hasta septiembre de 1987, petición que fue negada por la *a quo*, y por tal motivo, fue objeto de reproche en el recurso de apelación.

Así las cosas, pertinente resulta evocar que el contrato de trabajo, es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otro empleador, donde el primero presta personalmente sus servicios orientado bajo la subordinación hacia el segundo, y recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador.

Para ello, en el Código Sustantivo de Trabajo, delimitó tres elementos para diferenciar el contrato de trabajo de otros que pudiera darse en el desarrollo de las relaciones humanas, así:

“ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

Igualmente, es imperioso volver a traer a colación el artículo 24 ibídem, el cual fuera transcrito en párrafos anteriores:

“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”

Teniendo claros los alcances de la normatividad aplicable, y del contrato de trabajo, resalta el principio de primacía de la realidad sobre las formas, previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, consistente en la naturaleza laboral de toda relación jurídica sustancial, cuando se presenten sus tres elementos esenciales, al margen del nombre o modalidad contractual utilizada por las partes.

Es así como mínimamente, el trabajador, debe acreditar la prestación personal del servicio, la cual, definida en el artículo 5 del CST, se trata de cualquier oficio, material o intelectual, desempeñado necesariamente por una persona natural. Es este punto el elemento diferenciador pues la prestación del servicio siempre debe ejecutarse por el trabajador de manera personalísima, sin que sea posible la sustitución de trabajadores; pues si se presenta lo contrario, será la prestación de un servicio, contrario a la relación laboral.

Finalmente, dicha actividad debe beneficiar a un empleador.

La subordinación, es el sometimiento del trabajador a la esfera organicista, rectora y disciplinaria del empleador, donde la obediencia es la premisa principal, siendo este elemento diferenciador de otro tipo de contrataciones, pues se caracteriza por ser irrenunciable e intransmisible.

Aquella propia de las relaciones laborales es personal, pues el trabajador se somete a la persona del empleador, quien tiene la potestad para dar órdenes directas, implementar horarios y reglamentos internos, exigir permisos para ausentarse del lugar de trabajo, impartir sanciones disciplinarias ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otras, a diferencia de los contratos de índole civil, comercial o administrativo, donde los contratantes se someten al cumplimiento de las obligaciones contraídas, y no a las personas.

Es importante recordar, que la doctrina ha reconocido ciertos indicios que pueden dar lugar a deducir la materialización de una relación laboral, tales como las condiciones locativas de la prestación del servicio, que generalmente serían

dentro de la esfera del empleador; la existencia de un horario de trabajo; la ajenidad de los productos y los bienes producidos.

Finalmente, pero no menos importante, el servicio personal debe ser remunerado con una asignación que es pactada entre los contratantes y que tiene como fin retribuir la fuerza laboral impartida por el trabajador ante el empleador.

Ahora, el beneficio probatorio que tiene el empleado como extremo vulnerable de la relación contractual, y que es por esta especialidad amparado, no le quita otro tipo de obligaciones procesales y probatorias, es decir, no basta con acreditar sólo la prestación personal del servicio para que se derive inevitablemente la prosperidad de sus pretensiones, sino que, también recae en él la obligación de crear certeza sobre los extremos de la relación laboral que se endilga y respecto a quién.

En el contexto del demandante y su profesión de abogado, basados en la línea de defensa trazada por la pasiva, deviene también el análisis en concordancia con la línea jurisprudencial desarrollada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sobre el alcance de la subordinación en ésta clase de profesionales, teniendo en cuenta además la Recomendación N° 198 de la OIT.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo emitió la Recomendación N° 198 del 31 de mayo de 2006, relativa a la configuración de la relación laboral, definiendo en el numeral 13 los siguientes indicios:

“13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o por otros medios, indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes:

o (a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta

continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y

o (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador”.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, ha precisado los parámetros que permiten predicar si entre las partes existió relación laboral encubierta, o, por el contrario, se desarrolla con independencia y autonomía que por regla general se predica de las profesiones liberales como la del señor HERNÁN JAIME ECHEVERRI ARROYAVE.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido una jurisprudencia clara y precisa sobre la existencia de la relación laboral, determinando parámetros claros, así: SL 1439 de 2021 y SL 4479 de 2020, donde se analizó el alcance de prestación del servicio sujeta a control y supervisión; en la SL 2585 de 2019 se estudió la disponibilidad del trabajador; en la SL 2555 de 2015 se explicó la aplicación de sanciones disciplinarias; en la SL 981 de 2019 la continuidad en la prestación del servicio; en la SL 981 de 2019 el cumplimiento de jornada y horario; en la SL 4344 de 2020 la prestación del servicio en lugares definidos por el empleador; en la SL 981 de 2019 el suministro de materiales para la ejecución de la labor; en las SL 4479 de 2020, SL 5042 de 2020, SL 3812 de 2021 se analiza la integración en la estructura empresarial.

Aunado a ello, esta Colegiatura considera importante resaltar lo aleccionado por la Sala de Casación Laboral referente a las profesiones liberales, referenciando un aparte de lo indicado en la providencia CSJ SL1439-2021, donde explicó:

“Los trabajadores cualificados, como los de las profesiones liberales, gozan de una independencia técnica en la ejecución de su trabajo -para eso se les contrata-. Respecto de

ellos la subordinación no se expresa como frente a los obreros de las fábricas o los trabajadores no cualificados, pues poseen una relativa libertad de trabajo. La doctrina ha señalado que en estos casos «el poder de dirección no se ejerce ya en el corazón mismo de la prestación, sino tan sólo [sic] en su periferia, sobre las condiciones de ejecución de la prestación». Por consiguiente, la subordinación en las profesiones liberales recibe una respuesta adecuada a partir del criterio de la integración en un servicio organizado, que implica la dirección, no tanto del contenido de las prestaciones, sino de las condiciones de su ejecución (intuitu personae, remuneración periódica, jornadas y horarios, lugar de prestación del servicio, medios de trabajo físicos y digitales suministrados por el empleador, ajenidad en los frutos, cantidad de trabajo).”.

Un pronunciamiento más específico, esto es respecto al caso de los abogados, la Sala de Casación Laboral en sentencia SL1489-2023 enseñó:

*“Además, la labor que desarrollan los trabajadores cualificados -como lo son los abogados-, no es incompatible con la existencia de un contrato de trabajo, pues a pesar de que gozan de independencia técnica en la ejecución de su trabajo, **a estos también les aplican los presupuestos de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo desde una perspectiva de integración en un servicio organizado de la empresa** (CSJ SL225-2020 y CSJ SL3345-2021), tal y como sucedió en este caso.”* (Negrita intencional)

Conforme a las líneas descritas, no basta con informar que el demandante ejerce una profesión liberal para estar exentos del margen de una relación laboral, sino, que al probarse la prestación personal del servicio, la subordinación en la relación contractual, la recepción de una prestación económica como retribución del servicio, recae sobre la pasiva la carga probatoria de desvirtuar el contrato laboral que se presume.

En el trámite procesal, realmente se aprecia lacónica actividad probatoria en el asunto puntual, sin embargo, se resaltan los siguientes elementos:

Certificación expedida el día 8 de julio de 1993 por la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, donde se indicó lo siguiente.

De Febrero de 1983 a septiembre de 1987 se desempeño como Asesor Jurídico, realizando a su vez funciones administrativas.

Se expide en Medellín a los 8 días del mes de julio de 1993

También registra certificación expedida por la misma universidad el día 28 de febrero de 2007, donde se dispone:

**LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA,
SECCIONAL MEDELLÍN**

INFORMA QUE

El señor HERNÁN JAIME ECHEVERRI ARROYAVE identificado con cédula de ciudadanía número 8.233.925, prestó sus servicios como profesor de cátedra en el segundo semestre de 1979 en la Facultad de Economía.

Fue asesor jurídico desde el 30 de noviembre de 1982 hasta el 14 de marzo de 1985.

En la audiencia del artículo 80 del CPT y SS, se reitera la declaración de la señora MARTHA LUCÍA ARANGO GAVIRIA, quien señaló que el demandante solicitó una certificación, y para responderla, se constató en los libros de la entidad, que prestó los servicios desde 1884 hasta el 1997.

Del análisis probatorio en su conjunto, conforme las reglas de la sana crítica, orienta el convencimiento judicial en torno a considerar que no fue desvirtuada la presunción de existencia de relación laboral prevista en el artículo 24 del CST, pues con el acervo referenciado, no solo existe certeza de la prestación personal del servicio por parte del demandante, sino que además, fueron certificados con mucha proximidad los extremos del vínculo contractual.

No sobra mencionar que la UNIVERSIDAD COOPERATIVA no cumplió con la carga de la prueba arrimando elementos suficientes para generar total convicción sobre la independencia por parte del demandante, y contrario a ello, del mismo escrito proferido por esa entidad, se desprende que el señor ECHEVERRI ARROYAVE ejecutó actividades propias del normal desarrollo de la universidad, como lo son “*funciones administrativas*”, las cuales, a juicio de esta Colegiatura, no pueden realizarse con independencia técnica, a través de contrato civil de prestación de servicios.

Probada entonces la prestación personal del servicio, recaía sobre la parte demandada desvirtuar la existencia de la relación laboral, situación que no fue posible, de modo que, a las luces de la jurisprudencia enunciada ya explicada, y de acuerdo a la recomendación 198 de la OIT, se colige que se reúnen los presupuestos suficientes para colegir que el actor, en efecto, contaba con una relación de tipo laboral.

Con todo lo anterior, hay elementos suficientes para inferir que, entre el 30 de noviembre de 1982 y septiembre de 1987, el demandante estuvo unido con la universidad accionada mediante un contrato laboral, sin embargo, con el material probatorio arrimado, no es dable establecer el día exacto en el cual feneció el vínculo laboral.

Este tipo de eventualidades, también han sido abordadas por la Sala de casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rememorando la sentencia SL 1046 del año 2021, donde se enseñó:

“Con todo, no sobra agregar, que con total independencia de si los hitos de inicio y terminación se establecen en forma exacta o por aproximación, conforme a las probanzas arrimadas a juicio, entre uno y otro extremo, siempre tendrá que estar acreditada la continuada prestación del servicio en forma subordinada del trabajador para el empleador.”

Valga la pena también, traer a colación lo adocetrinado por la misma corporación, quien en diversas oportunidades ha analizado y establecido la teoría de la aproximación de los extremos laborales, sea el caso mencionar la reciente SL2096-2021, donde se señaló:

“Sin embargo, como no precisaron el extremo final de esa anualidad, pues solo uno de los declarantes anunció que el finiquito ocurrió el 13 de agosto de 2013, pero sin que ninguno indicara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo acontecido o el motivo por el cual recordaban con precisión que el recurrente e inclusive, ellos mismos, laboraron hasta esa fecha, era dable acudir a la regla de aproximación sentada por la jurisprudencia en las providencias CSJ SL, 22 mar. 2006, rad. 25580; CSJ SL, 28 abr. 2009, rad. 33849; CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 42167; CSJ SL905-2013; CSJ SL14032-2016 y CSJ SL1181-2018.

Ciertamente, en casos como el presente, cuando se tiene certeza sobre la prestación de un servicio en un determinado período, la Sala ha indicado perentoriamente que los jueces deben procurar por desentrañar de los elementos de persuasión, los extremos temporales de la relación laboral, asumiendo, por lo menos, que ello ocurrió en el primer día del año o en el último, según el caso.”

La sentencia SL-905-2013, dispuso:

En tales condiciones, si se trata de la fecha de ingreso, teniendo únicamente como información el año, se podría dar por probado como data de iniciación de laborales el último día del último mes del año, pues se tendría la convicción que por lo menos ese día lo trabajó. Empero frente al extremo final, siguiendo las mismas directrices, sería el primer día del primer mes, pues por lo menos un día de esa anualidad pudo haberlo laborado.

Ante la antigüedad de los hechos narrados la carga probatoria se hace más pesada, sin embargo, la parte actora si logró probar la existencia de la relación laboral con la pasiva y arrimar acervo que soportaba sus dichos, y se reitera, los elementos probatorios deben revisarse en un conjunto, calificando la coherencia entre éstos bajo las reglas de la sana crítica.

En atención a lo anterior, y en vista que se probó la existencia de la relación laboral desde el 30 de noviembre de 1982 a septiembre de 1987, pero no hay exactitud del día exacto en que esta concluyó, esta Sala de Decisión, estima procedente determinar que el extremo final del vínculo contractual, se configuró 01 de septiembre de 1987, es decir el primer día que se tiene certeza de la prestación del servicio en dicho mes y año.

Finalmente, como no se demostró el valor concreto de la remuneración percibida, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 145 del CST, y 15 de la Ley 100 de 1993, entendiéndose que trató del salario mínimo legal para la época.

En este sentido, se REVOCARÁ la sentencia objeto de revisión.

DEL DEBER DE APROVISIONAMIENTO Y DEL CÁLCULO ACTUARIAL

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir de la expedición de sentencia SL 9856 de 2014, abandonó la tesis en la que se predicaba una inmunidad total del empleador ante la falta de aportes por ausencia de cobertura territorial del ISS, para dar paso a una nueva postura, en la que sí tiene responsabilidad desde el punto de vista financiero por el tiempo en el cual el asalariado le brindó su fuerza de trabajo.

En la providencia aludida, estimó la Corte que, ante la omisión legislativa, no resultaba razonable cargarle las consecuencias a la parte débil de la relación laboral; de suerte que *“el patrono, debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento pudo haberse liberado de la carga que le correspondía, amén de las obligaciones contractuales existentes entre las partes”*.

Este criterio se ha mantenido invariable y ha sido sostenido, entre otras, en las sentencias SL-14388 de 2015, SL-2138 de 2016, SL-18398 de 2017, SL-361-de 2018, SL-287 de 2018, SL-1358 de 2018, SL-1342 de 2019 y SL-1356 de 2019. En esta última, reiterada en la sentencia SL-244 de 2023, se consideró:

“...Con ese objeto, conviene señalar que, a partir del año 2014, la jurisprudencia de esta Sala dejó de lado la teoría que defiende la recurrente en sede del recurso extraordinario. En efecto, desde la sentencia CSJ SL 41745, 16 jul. 2014, la postura que adoptó esta Corporación, es que las obligaciones de los empleadores con sus trabajadores derivadas de la seguridad social en pensiones, subsisten aun cuando la falta de afiliación al sistema no obedezca a su culpa o negligencia.

Ello implica que, en los periodos no cotizados por falta de cobertura, son ellos —los empleadores— quienes asumen a través de un cálculo actuarial las contingencias que se originan en la vejez,

invalidez o muerte, de tal forma que con dichos recursos se garantice el financiamiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del ISS hoy Colpensiones.

...

Sin embargo, en el 2014, la Corporación fijó un criterio mayoritario a partir de las sentencias CSJ SL9856-2014 y CSJ SL17300-2014 y, así, abandonó antiguas posiciones en las que se predicaba una inmunidad total del empleador, en cuanto entendía que no incurría en omisión de afiliación de sus trabajadores y pago de cotizaciones para cubrir el riesgo de vejez, en aquellas regiones del país en las que no había cobertura del ISS.

...

Bajo esos derroteros, en la sentencia CSJ SL9856-2014, luego reiterada en sentencia CSJ SL10122-2017, la Sala definió: (i) que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones; (ii) que, en ese sentido, esos lapsos de no afiliación por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional, y (iii) que la manera de concretar ese gravamen, en casos «(...) en los que [el trabajador] no alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, [es] facilitar (...) que consolide su derecho, mediante el traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social...».

La Corporación mencionada en la sentencia SL-244 de 2023, reitera lo expuesto en las sentencias SL-3506 de 2019, SL-069 de 2018 y SL-1358 de 2018, donde se sostuvo que:

*“...la Corte ya ha determinado que en desarrollo de reglas tales como las establecidas en los literales c) y d) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9.º de la Ley 797 de 2003, y de principios de la seguridad social como los de universalidad, integralidad, unidad y eficiencia, **todas las hipótesis de omisión en la afiliación, sea cual sea la razón a la que obedezcan, deben encontrar una solución común, que consiste en que las entidades de seguridad social tengan en cuenta el tiempo servido,***

como tiempo efectivamente cotizado, con la obligación correlativa del empleador de pagar el título pensional que corresponda, por los tiempos omitidos, tal y como lo dedujo el Tribunal... (Negrillas fuera del texto original).

Conforme la jurisprudencia citada, el empleador está en la obligación de sufragar el valor del cálculo actuarial a la entidad de seguridad social, por aquellos periodos en los que el trabajador le hubiere servido, sin que importe si se había iniciado la cobertura de afiliación, a fin de contribuir con la conformación del capital necesario para el financiamiento de la prestación del trabajador.

Conforme lo anterior, se tiene que los tiempos servidos no cotizados por falta de cobertura, deben reconocerse a través de un cálculo actuarial, así se itera en la sentencia SL-2465 de 2021, "...corresponde al empleador efectuar el pago de la totalidad del cálculo actuarial por falta de afiliación, teniendo en cuenta que el mismo difiere sustancialmente de las simples cotizaciones o aportes indexados o con intereses moratorios, como si se tratara de periodos en mora de pago, pues representa la proporción de capital necesario para sufragar la pensión, con relación al tiempo de servicios en el que el empleador fue el único responsable de la prestación..."

Luego, respecto de la participación del extrabajador en el pago del cálculo actuarial, se señala lo siguiente.

El parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, consagra que es el empleador o la caja quien debe trasladar, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente, representada en un bono o título pensional, sin que el trabajador esté llamado a contribuir de alguna manera en el pago de tales sumas.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias SL-2584 de 2020, SL-673 de 2021, reiteradas en la sentencia SL-244 de 2023, dijo:

"...La razón por la cual el empleador debe asumir íntegramente la mencionada erogación radica en que durante el lapso de no afiliación por falta de cobertura fue el único responsable del riesgo pensional, en la medida que durante tal interregno la obligación estuvo totalmente a su cargo. De ahí que no resulta procedente que el valor del título pensional sea distribuido entre él y el extrabajador en la proporción prevista legalmente para los aportes pensionales, tal como lo pretende la recurrente.

Por tal razón, las disposiciones que transcribe la censura para respaldar su tesis no resultan aplicables en este asunto, toda vez que la condena cuyo pago le fue impuesta en las instancias consiste en el título pensional correspondiente al lapso de vinculación, más no el pago de cotizaciones al sistema de pensiones que es lo que aquellas regulan.

Además, el párrafo 1.º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, establece que el tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la dicha ley tenía a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión debe tenerse en cuenta para efectos de la misma, para lo cual «el empleador o la caja» deberán trasladar con base en el cálculo actuarial la suma correspondiente, representado a través de un bono o título pensional, sin que en modo alguno la norma establezca la contribución por parte del trabajador.

En efecto, la referida disposición dispone «En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional...».

Y en la sentencia SL-672 de 2023, el Alto Tribunal replicó lo expuesto en la sentencia SL-1579 de 2022, en la cual se precisó:

“Finalmente, reitera la Sala en esta oportunidad, que de conformidad con el párrafo 1.º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el valor del cálculo actuarial que el empleador debe trasladar a la entidad de seguridad social, está exclusivamente a su cargo, sin que se haya dispuesto contribuir alguna para el trabajador, como se precisó en sentencia CSJ SL 2584-2020:

La razón por la cual el empleador debe asumir íntegramente la mencionada erogación radica en que durante el lapso de no afiliación por falta de cobertura fue el único responsable del riesgo pensional, en la medida que durante tal interregno la obligación estuvo totalmente a su cargo. De ahí que no resulta procedente que el valor del título pensional sea distribuido entre él y el extrabajador en la proporción prevista legalmente para los aportes pensionales, tal como lo pretende la recurrente”.

Ahora, en los asuntos específicos donde se discute la existencia de un contrato laboral generada por las labores de docencia por horas cátedra, el órgano de cierre de esta especialidad, ha zanjado una posición al respecto, indicando que, para dichos trabajadores que se entiendan vinculados mediante una relación laboral, tienen derecho a que emita a su favor, un cálculo actuarial de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado. En sentencia SL361-2018, la cual se encuentra plenamente vigente, se indicó:

“La Corte Constitucional en la sentencia CC C-517/99 cuando declaró parcialmente inexecutable el artículo 106 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de la Educación Superior, puntualizó que los docentes hora cátedra que se entienden vinculados por contrato de trabajo, tienen derecho a percibir las prestaciones sociales y derechos laborales reconocidos por la ley, en forma proporcional al tiempo laborado.

4.- Para la Corte, el Tribunal en el sub lite incurrió en un yerro jurídico, porque condenó a la Universidad empleadora, en favor de la demandante, a la emisión de un título correspondiente al cálculo actuarial de los lapsos que van desde el 12 de febrero de 1979 al 31 de diciembre de 1982, y del 1º de enero al 10 de septiembre de 1984, desde el 21 de julio al 9 de agosto de 1990 y del 1º de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1995, por periodos calendario, «sin importar la intensidad horaria de su labor». Esto, no obstante estar demostrado que la labor no fue continua, y que su vinculación se dio mediante varios contratos de trabajo hora cátedra y con una intensidad inferior al medio tiempo. Así las cosas, se imponía al juzgador precisar la vigencia de cada uno de los contratos y la remuneración realmente percibida, para de esa manera realizar el cálculo actuarial, de forma proporcional, y de acuerdo con el periodo académico efectivamente laborado; como no lo hizo de esa manera, la decisión debe ser quebrantada.” (Negrita intencional)

De conformidad a lo anterior, inicialmente habrá de indicarse que, esta Colegiatura comparte la decisión adoptada por la falladora de primera instancia, en tanto ordenó a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, previa realización por parte de COLPENSIONES, pagar cálculo actuarial en favor del demandante, por los periodos durante los cuales existió contrato de trabajo, ejerciendo la labor de docente hora cátedra, sin embargo, se

MODIFICARÁ en lo relativo a los salarios, clarificando que dicho cálculo, se efectuará conforme a los salarios mínimos de la época.

No obstante lo anterior, y en vista que en esta instancia se declaró otra relación laboral entre las partes, habrá de ORDENARSE a COLPENSIONES, adicionar en dicho cálculo actuarial en favor del señor JAIME ECHEVERRI ARROYAVE, los tiempos acá establecidos entre el 30 de noviembre de 1982 al 1 de septiembre de 1987, título que por su puesto, deberá ser pagado por la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

Para mejor intelección, el cálculo se efectuará con los siguientes extremos:

1 de marzo al 30 de junio de 1979
1 de agosto al 30 de noviembre de 1979
1 de marzo al 30 de junio de 1980
1 de marzo al 30 de junio de 1984
1 de agosto al 30 de noviembre de 1984
1 de marzo al 30 de junio de 1985
30 de noviembre de 1982 al 1 de septiembre de 1987.

Lo anterior con base en un salario mínimo para la época.

Vale resaltar que los vínculos contractuales como docente horas catedra por los periodos 1 de marzo al 30 de junio de 1984, 1 de agosto al 30 de noviembre de 1984, y 1 de marzo al 30 de junio de 1985, coinciden temporalmente con la relación laboral acá declarada, entre el 30 de noviembre de 1982 al 1 de septiembre de 1987, clarificando que se trata de relaciones laborales diferentes, con remuneraciones independientes, motivo por el cual, al momento de efectuar el cálculo, se tendrá en cuenta doble IBC, puntualmente para estos ciclos.

Corolario a lo anterior, se REVOCARÁ y MODIFICARÁ los hechos cuarto y quinto de la sentencia.

DEL DERECHO PENSIONAL.

Debe principiarse el análisis, señalando que en la sentencia de primer grado, la *a quo* determinó que, según lo dispuesto por la Sala de casación Laboral, el señor HERNÁN JAIME ECHEVERRI ARROYAVE no es beneficiario del régimen de transición, toda vez que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1994, no estaba afiliado al sistema, pues su primer cotización se efectuó el 1 de noviembre de 1995.

Sobre el asunto, se denota imperioso recordar que el órgano de cierre de la especialidad laboral, en sentencias CSJ SL2129-2014, CSJ SL8639-2015, CSJ SL3267-2016, entre otras, había dispuesto que para ser beneficiario de un régimen anterior por vía de transición, se requiere, como mínimo, que se haya estado afiliado a un régimen pensional durante su vigencia ordinaria, pues solo puede accederse al derecho pensional si se cumplen los supuestos de hecho que la norma exige.

“Al respecto, esta Sala de Casación en sentencia CJS SL8098-2014, en la que se rememoró la providencia CSJ SL2129-2014, reiterada recientemente en fallos CSJ SL9965-2015 y CSJ SL10483-2015, frente al mismo tópico hoy debatido y dentro de un proceso seguido contra el mismo demandado, precisó:

*(...) la Sala tuvo la oportunidad de estudiar y definir el tema, y en un asunto análogo adocrinó que **para que se aplique el régimen de transición del artículo 36 de la L. 100/1993, es presupuesto fundamental que ese grupo poblacional, frente al cambio legislativo, tenga en ese momento una expectativa legítima de que su pensión será producto de aplicar el sistema o régimen pensional anterior del cual es beneficiario, sin que sea indispensable tener la condición de cotizante activo para el 1º de abril de 1994. En otras palabras, es posible acceder al derecho pensional con amparo en la citada transición, pero siempre y cuando la persona hubiera estado afiliada al sistema anterior con el que aspira pensionarse, ya que no es admisible hacer derivar un derecho de una calidad que nunca se tuvo. En sentencia reciente de la CSJ SL 220129-2014, del 19 de feb./ 2014, rad. 49815, en un proceso seguido contra el mismo Instituto de Seguros Sociales, se puntualizó: (...)***

Nótese que la razón de ser para implementar un régimen de transición cuando opera un cambio legislativo en materia pensional, no es otra que la de proteger a quienes estuvieren próximos a pensionarse, respetándoles los requisitos que les exigía el sistema pensional que les aplicaba con antelación al nuevo, sin que ello signifique que para beneficiarse de esta garantía sea necesario estar cotizando en ese momento.

Para que lo anterior justifique su operatividad, es decir, que se aplique el beneficio del régimen de transición, es presupuesto fundamental que ese grupo poblacional, frente al cambio legislativo, tenga en ese momento una expectativa legítima de que su pensión será producto de aplicar el sistema o régimen pensional anterior del cual es beneficiario, sin que sea menester tener la condición de cotizante activo, en este caso, para el 1 de abril de 1994 (...). (Resaltado fuera del texto original).

En esas condiciones, reitera la Sala que el régimen de transición que contempla el tránsito de legislaciones pensionales, tiene como finalidad que las personas próximas a cumplir los requisitos para pensionarse, se les respete su expectativa legítima de consolidarlo bajo las condiciones anteriores. De ahí que, para que se aplique el régimen de transición previsto en el art. 36 de la L. 100/1993, es necesario haber estado afiliado al régimen anterior con el que aspira pensionarse, ya que no es admisible derivar un derecho de una calidad que nunca se ostentó.”

Empero, el mismo tema fue analizado por el máximo órgano constitucional, quien, en contraposición a lo establecido por la Sala Laboral, dispuso que no es admisible la exigencia de haber estado afiliado o cotizando al ISS a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para poder aplicar a la prerrogativa del régimen de transición, pues dicho requisito, aparte de no estar consagrado e ninguna disposición normativa, vulnera derechos fundamentales de los asociados. Así, en sentencia SU273-22 desarrolló lo siguiente:

*“25. En conclusión, **en la actualidad existe un precedente unificado, pacífico, uniforme y reiterado que rechaza la exigencia de haber estado afiliado o haber cotizado al ISS para la fecha de entrada de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), como condición para aplicar de manera ultractiva los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990.** Eso para peticionarios beneficiarios del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993 y por las siguientes razones: (i) porque no existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que contenga o sustente tal exigencia; se trata en realidad de una regla sin un sustento adicional al criterio de*

COLPENSIONES o de algunos jueces que han omitido tener en cuenta el precedente vinculante explicado en los fundamentos jurídicos anteriores; (ii) es contraria a los principios de igualdad, irrenunciabilidad de los derechos laborales y del principio de favorabilidad, pues supone un acto discrecional que impide el reconocimiento de un derecho, sin justificación alguna, y (iii) vulnera derechos fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital y la vida, pues trunca la obtención de una mesada pensional para quienes son beneficiarios del régimen de transición y tienen derecho a pensionarse, al cumplir con los requisitos exigidos en aquel régimen que les fuere más favorable, previo al consagrado en la Ley 100 de 1993.”

Al existir entonces posiciones disimiles por parte de los máximos órganos de cierre frente a un mismo tema, este Juez Plural adoptará lo enseñado por la Corte Constitucional, toda vez que, conforme se ha dispuesto en la Ley 270 de 1996, y de acuerdo a lo expresado en la sentencia SU611-17, es obligatoria la aplicación de las sentencias de unificación, al constituirse en una doctrina constitucional.

Clarificada entonces la forzosa aplicación de lo dispuesto por la Corte Constitucional, se analiza la prueba documental alegada, estableciéndose que el señor HERNÁN JAIME ECHEVERRI ARROYAVE nació el 25 de febrero de 1942, por tal razón tenía 52 años de edad el 1º de abril de 1994 fecha de entrada en vigencia en el sector privado del Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, implicando ello que era beneficiario, en principio, del régimen de transición previsto en el artículo 36 de esta normatividad.

En virtud de la norma citada, se conservó la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas de cotización y el monto de la pensión por vejez establecidos en el régimen anterior, en favor de tres categorías de trabajadores: los hombres con cuarenta o más años de edad, las mujeres con treinta y cinco o más años de edad, y unos y otras que independientemente de su edad tuviesen quince o más años de servicios cotizados.

Ahora, de acuerdo a reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, “*el **régimen pensional anterior** que ampara la transición, es aquel que traía el afiliado antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones; esto supone entonces, que con anterioridad, la situación pensional de quien pretende beneficiarse de la transición, estaba necesariamente regulada por un determinado régimen del que aspira aplicación ultractiva en los aspectos previstos por la misma disposición*” (Sentencias SL13663 de 2016, Radicado 52.992; y SL142 de 2018, Radicado 49.295).

El régimen pensional que amparaba al citado actor cuando entró a regir el Sistema General de Pensiones referido, era el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad, máxime que las últimas cotizaciones antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, son las declaradas judicialmente en la UNIVERSIDAD COOPERATIVA, entidad privada.

De este modo, para acceder a la pensión por vejez por la normatividad mencionada anteriormente, se exigía sesenta o más años de edad a los hombres o cincuenta y cinco o más años de edad a las mujeres, y un número de 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado 1.000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

Adicionalmente, el Parágrafo Transitorio 4° del Acto Legislativo 001 de 2005 expedido el 25 de julio del mismo año, instituyó el 31 de julio de 2010 como límite para la vigencia del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas que lo desarrollan, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen tuviesen cotizadas, al menos, 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, a los cuales se les mantuvo tal régimen hasta el 31 de diciembre de 2014.

Teniendo en cuenta la historia laboral arrimada, y añadiendo todas las semanas declaradas en vía judicial, concretamente por los períodos 1 de marzo al 30 de junio de 1979, 1 de agosto al 30 de noviembre de 1979; 1 de marzo al 30 de junio de 1980; y del 28 de febrero de 1983 a 1 de septiembre de 1987, la Sala advierte que, a la vigencia del Acto Legislativo referido, el accionante contaba con 1.017,71 semanas, que le permitían conservar el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014.

Sea este el momento oportuno para clarificar que, la parte accionante referencia unos tiempos laborados por el señor ECHEVERRY ARROYAVE en la DEFENSORÍA DEL PUEBLO desde el año 1995 hasta 2003, bajo la modalidad

de prestación de servicios, afirmándose además que, éste a *motu proprio*, efectuó las cotizaciones como independiente, las cuales no se ven reflejadas en la historia laboral. Sin embargo, no reposa en el plenario alguna prueba documental que acredite dichos pagos, motivo por el cual, no se tendrán en cuenta para el cómputo de semanas.

Ahora, se avizora que las mismas 1.017,71 semanas, fueron las acumuladas por el accionante durante toda su vida laboral; y según la fecha de nacimiento ya mencionada, se concluye que los 60 años de edad, fueron cumplidos por éste el 25 de febrero de 2002, esto es, dentro del plazo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005.

Por todo lo ya analizado, se colige que, el demandante consolidó el derecho a la pensión por vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Por otro lado, y debido a los tiempos laborados por el señor HERNÁN JAIME ECHEVERRI ARROYAVE al sector público, específicamente como servidor de Fiscalía General de La Nación, Rama Judicial, Municipio de Medellín, Beneficencia de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, se deberá explicar que esta Sala de Decisión, venía prohiendo la tesis que no era legalmente procedente sumar tiempos públicos no cotizados al ISS, para efectos del reconocimiento del derecho pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, bajo el entendimiento de la línea jurisprudencial adoptada por la Corte Constitucional, en las sentencias SU-769 de 2014 y T-521 del 18 de agosto de 2015, en las que se indicó, que sólo era procedente tal sumatoria, cuando el afiliado no podía acceder a la pensión de vejez con una legislación distinta al citado Acuerdo.

En el mismo sentido, frente al tema planteado, fue criterio reiterado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que para el reconocimiento de las pensiones de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, no era posible acumular tiempo laborado en el sector público no cotizado al ISS o

cotizadas a otro fondo o caja de previsión social, con semanas cotizadas a este instituto, toda vez que, en sentir de esta Corte, cuando el literal f) del artículo 13 y el párrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 autoriza dicha sumatoria, se refiere a la pensión de vejez del Sistema de Seguridad Social Integral y a la que regula la Ley 71 de 1988. Dicha posición había sido plasmada entre otras, en las sentencias SL- 16104 de 2014, SL-16086 de 2015, SL-11241 de 2016, SL-168 de 2016 y SL-4031 de 2017.

No obstante ello, tanto la Corte Constitucional, como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, revaluaron su posición, y admitieron la posibilidad de sumar tiempos públicos sin cotización al ISS hoy COLPENSIONES, con las semanas cotizadas a esta entidad, cuando se solicita el reconocimiento de la pensión de vejez.

Sea del caso recordar que, el máximo órgano Constitucional, en sentencia SU273 de 2022, dispuso:

“39. En conclusión, desde el año 2009 la Corte Constitucional consolidó un precedente, fundado en una línea jurisprudencial pacífica, clara y reiterada –que materializa al principio de favorabilidad– la cual admite la acumulación de tiempos de servicio cotizados a cajas o fondos de previsión públicos y privados, con semanas aportadas al ISS (hoy COLPENSIONES). Esto, en virtud de que: (i) el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 no exige para su aplicación que los aportes se hayan hecho exclusivamente al ISS; y (ii) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 circunscribe el régimen de transición a los requisitos de edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, no al cómputo de semanas. Para este último factor, es aplicable el párrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

La Sala Plena también ha precisado que, si bien sólo desde la Ley 100 de 1993 se hizo explícita la posibilidad de acumular semanas y tiempos de servicio, independientemente del fondo al que se había hecho el aporte, eso no es óbice para que los ciudadanos puedan acumular

tiempos bajo regímenes pensionales previos, como el Acuerdo 049 de 1990. Es por esta razón que el requisito de cotizaciones exclusivas al ISS vulnera los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso. También desconoce el principio de legalidad pues impone un presupuesto adicional que no está explícitamente previsto en las normas. Es, simultáneamente, contrario al principio de favorabilidad, en virtud del cual el operador administrativo o judicial debe elegir el régimen más beneficioso para el afiliado e interpretar las disposiciones que regulan la obtención de la pensión de la manera más beneficiosa para quien la solicita. La Sala destaca que, desde hace un tiempo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia comparte esta interpretación con la Corte Constitucional.

...

44. En conclusión, el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones supone un equilibrio entre los recursos que ingresan a ese sistema y los destinados a pagar tales prestaciones. También implica la observancia de las reglas enumeradas en el artículo 48 de la Carta Política. Sin perjuicio de su importancia, se trata de un criterio subordinado a la materialización de los principios constitucionales, pues su aplicación no puede impedir el reconocimiento de una prestación, para quien acredite legítimamente todos los requisitos que la Ley prevé para obtener una pensión.” (Negrilla intencional)

Por su parte, la Sala de Casación Laboral en las sentencias, SL-1981-2020 y SL-1947-2020, también se pronunció sobre el particular, y en la última providencia referenciada, precisó:

“...En este punto, es oportuno señalar que la jurisprudencia de esta Corporación ha adoctrinado la improcedencia en la sumatoria de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales con tiempos de servicios públicos a efectos de conceder la pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, bajo el entendido de que esta normatividad no previó expresamente tal posibilidad, como sí lo hizo unos años atrás la Ley 71 de 1988.

En este sentido, la Sala predicó que la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990 solo podía configurarse con el cumplimiento de las edades mínimas allí previstas y un mínimo de 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores a éstas o 1000 semanas en cualquier época, bajo el presupuesto que éstas fueran efectivamente aportadas al ISS y en los términos fijados por sus reglamentos.

Asimismo, la jurisprudencia de la casación del trabajo resaltó que el legislador en el año 1993 dispuso el cómputo de tiempos públicos y privados para el acceso a la pensión de vejez, a través de lo dispuesto en el parágrafo 1.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo que éste resultaba

aplicable a las pensiones gobernadas en su integridad por esta normativa.

...

No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

...

Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens...”.

Posición ratificada reciente, y en sentencia SL459 de 2023, se enseñó:

“En segundo lugar, en cuanto a la sumatoria de tiempos para la reliquidación pensional solicitada en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, basta traer a colación los discernimientos planteados en sede de casación, en los que se dijo que, si bien el criterio inicial de esta corporación consistía en que no era posible sumar los tiempos públicos no aportados al ISS con las cotizaciones efectivamente sufragadas a esa entidad de seguridad social, el mismo fue variado por la Sala, quien, como consecuencia de un nuevo análisis, estableció que sí es viable computarlos para efectos del reconocimiento pensional (CSJ SL1947-2020).

Adicionalmente, se indicó que la sumatoria no solo es procedente para el reconocimiento inicial de la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sino que también lo es para los casos en que se deprecia la reliquidación de la prestación (CSJ SL2061-2021). En consonancia con lo dicho, en sentencia CSJ SL3484-2022, la Corte iteró el criterio según el cual es posible la adición de tiempos aludidos para efectos de obtener la reliquidación pensional en los términos del Acuerdo 049 de 1990.”.

La nueva interpretación del Órgano de cierre de la jurisdicción laboral, la cual se encuentra en armonía con la Corte Constitucional, permite la posibilidad de acumular tiempos públicos sin cotización al ISS hoy Colpensiones, con las semanas cotizadas a esta entidad, aplicando el Acuerdo 049 de 1990, a los beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que esta Sala de decisión acogió esta tesis desde la sentencia del 24 de febrero de 2021, dentro del proceso con radicación 05001310501620170022401 con Ponencia del magistrado Francisco Arango Torres, en cumplimiento de la orden de tutela impartida dentro de la acción Constitucional STL 1078 de 2021.

En consecuencia, se concluye que el accionante causó su derecho a la pensión por vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, tanto el requisito de la edad como de las semanas cotizadas, las acreditó antes del 31 de diciembre de 2014.

Para efectos de realizar la liquidación del IBL, resulta pertinente analizar lo adoctrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL138-2024, donde expuso:

“Así las cosas, para esta Sala, una nueva lectura del parágrafo 2° del artículo 33° de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, permite comprender el alcance de la norma, que no es otro que el de que para efectos de determinar el número de semanas cotizadas, los días de la semana, del mes o del año se deben tomar del calendario, al tiempo que para la facturación y pago de los aportes el mes de toma por periodos de 30 días, tal cual se desprende del propio texto de la normativa:

Parágrafo 2°. - Para efectos de las disposiciones contenidas en la presente Ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada periodo.

Lo dicho igualmente encuentra sustento en el hecho de que la base de cotización no sólo se estima en función del salario mensual, que se paga por periodos de 30 días, sino también, en función de los ingresos de los afiliados cuando no están vinculados por contratos de trabajo o como servidores públicos, pues «cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos», sin perjuicio de que, quienes son beneficiarios de los subsidios del fondo de solidaridad pensional y de los afiliados cuyos aportes son realizados por terceros, cotizan sin consideración a salario alguno (Art. 15, parágrafo 1°, literal e), Ley 100 de 1993). Por tanto, para esta clase de afiliados, la tesis salarial para contabilizar los meses de 30 días y los años de 360 se desvanece al no tener sustento alguno la tesis de que la cotización reposa en la métrica de conceptos de orden laboral que utilizan para su liquidación dichos periodos.

*En suma, para la facturación y pago de aportes los días cotizados son 30 en cada período, pero como la cotización cubre todos los días del período de trabajo cubierto por el salario o ingreso asegurado, durante el cual, además, el afiliado ha estado expuesto a los riesgos materia de la cobertura, **se impone entender que todos los periodos --semana, mes o año-- se contabilicen en días calendario para poder establecer el número de semanas cotizadas para de esa forma, hacer el cálculo pertinente al reconocimiento de las prestaciones del sistema general de pensiones, criterio jurisprudencial que será tenido en cuenta en adelante, recogiénose así cualquiera otro anterior que lo contrarie.**”* (Negrita y subraya fuera del texto original)

Vale la pena aclarar que esta Sala de Decisión venía adoptando una posición diferente según lo dispuesto por el órgano de cierre de ésta especialidad,

concretamente en sentencias CSJ SL3794-2015, y CSJ SL7995-2015, reiteradas en providencias CSJ SL2050-2017, y SL529-2018, y recientemente ratificadas en las CSJ SL3585-2020 y CSJ SL3130-2022, en las cuales, se había establecido que *“la correcta contabilización de los términos para la afiliación o cotización se toman así: una semana equivale a 7 días, un mes debe considerarse que es de 30 días y, por consiguiente, un año corresponde a 360 días y, por ende, ese cálculo no se mide por los días calendario”*. Empero, la mentada corporación, en la precitada sentencia SL138-2024, claramente adocrinó una nueva interpretación que recoge cualquier criterio jurisprudencial anterior, razón por la cual, este fallador colegiado, se adopta a la nueva postura dispuesta.

En armonía con lo anterior, y procediendo propiamente a realizar el cálculo de la IBL, debe advertirse que al 1° de abril de 1994, cuando entró en vigencia en el sector privado el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, al asegurado le faltaban menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión por vejez, por ende, el Ingreso Base de Liquidación de la prestación debía integrarse en los términos del inciso 3° del artículo 36 de dicha Ley.

La norma aludida le brinda al asegurado la posibilidad de conformar el Ingreso Base de Liquidación de su pensión por vejez con el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó durante el tiempo que le hacía falta para acceder al derecho teniendo en cuenta la fecha de vigencia del sistema general de pensiones, o con el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, si este fuese superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

Teniendo en cuenta la densidad de semanas antes señalada, y los salarios devengados en cada período, concluye la Sala que, para el caso del accionante, le resulta más beneficioso dar aplicación al promedio de lo devengado durante toda la vida, pues las semanas cotizadas durante el tiempo que le hacía falta, fueron por el mínimo legal.

CÁLCULO INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN

F. INICIAL	27-mar-68	TOTAL DÍAS	7124
F. FINAL	31-dic-03		

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DÍAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	ÍNDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	ÍNDICE IPC INICIAL
27-mar-68	31-mar-68	\$ 4.000	5	\$ 2.122.800	\$ 1.490	2003	53,07	1967	0,10
1-abr-68	30-abr-68	\$ 4.000	30	\$ 2.122.800	\$ 8.939	2003	53,07	1967	0,10
1-may-68	31-may-68	\$ 4.000	31	\$ 2.122.800	\$ 9.237	2003	53,07	1967	0,10
1-jun-68	30-jun-68	\$ 4.000	30	\$ 2.122.800	\$ 8.939	2003	53,07	1967	0,10
1-jul-68	31-jul-68	\$ 4.000	31	\$ 2.122.800	\$ 9.237	2003	53,07	1967	0,10
1-ago-68	31-ago-68	\$ 4.000	31	\$ 2.122.800	\$ 9.237	2003	53,07	1967	0,10
1-sep-68	30-sep-68	\$ 4.000	30	\$ 2.122.800	\$ 8.939	2003	53,07	1967	0,10
1-oct-68	31-oct-68	\$ 4.000	31	\$ 2.122.800	\$ 9.237	2003	53,07	1967	0,10
1-nov-68	30-nov-68	\$ 4.000	30	\$ 2.122.800	\$ 8.939	2003	53,07	1967	0,10
1-dic-68	31-dic-68	\$ 4.000	31	\$ 2.122.800	\$ 9.237	2003	53,07	1967	0,10
1-ene-69	31-ene-69	\$ 4.750	31	\$ 2.520.825	\$ 10.969	2003	53,07	1968	0,10
1-feb-69	28-feb-69	\$ 4.750	28	\$ 2.520.825	\$ 9.908	2003	53,07	1968	0,10
1-mar-69	31-mar-69	\$ 4.750	31	\$ 2.520.825	\$ 10.969	2003	53,07	1968	0,10
1-abr-69	30-abr-69	\$ 4.750	30	\$ 2.520.825	\$ 10.615	2003	53,07	1968	0,10
1-may-69	31-may-69	\$ 4.750	31	\$ 2.520.825	\$ 10.969	2003	53,07	1968	0,10
1-jun-69	30-jun-69	\$ 4.750	30	\$ 2.520.825	\$ 10.615	2003	53,07	1968	0,10
1-jul-69	31-jul-69	\$ 4.750	31	\$ 2.520.825	\$ 10.969	2003	53,07	1968	0,10
1-ago-69	31-ago-69	\$ 4.750	31	\$ 2.520.825	\$ 10.969	2003	53,07	1968	0,10
1-sep-69	30-sep-69	\$ 6.057	30	\$ 3.214.450	\$ 13.536	2003	53,07	1968	0,10
1-oct-69	31-oct-69	\$ 2.800	31	\$ 1.485.960	\$ 6.466	2003	53,07	1968	0,10
1-nov-69	30-nov-69	\$ 2.800	30	\$ 1.485.960	\$ 6.258	2003	53,07	1968	0,10
1-dic-69	31-dic-69	\$ 2.800	31	\$ 1.485.960	\$ 6.466	2003	53,07	1968	0,10
1-ene-70	31-ene-70	\$ 2.800	31	\$ 1.350.873	\$ 5.878	2003	53,07	1969	0,11
1-feb-70	28-feb-70	\$ 2.800	28	\$ 1.350.873	\$ 5.309	2003	53,07	1969	0,11
1-mar-70	31-mar-70	\$ 2.800	31	\$ 1.350.873	\$ 5.878	2003	53,07	1969	0,11
1-abr-70	30-abr-70					2003	53,07	1969	0,11
1-may-70	31-may-70	\$ 6.000	31	\$ 2.894.727	\$ 12.596	2003	53,07	1969	0,11

1-jun-70	30-jun-70	\$ 6.000	30	\$ 2.894.727	\$ 12.190	2003	53,07	1969	0,11
1-jul-70	31-jul-70	\$ 6.000	31	\$ 2.894.727	\$ 12.596	2003	53,07	1969	0,11
1-ago-70	31-ago-70	\$ 6.000	31	\$ 2.894.727	\$ 12.596	2003	53,07	1969	0,11
1-sep-70	30-sep-70	\$ 6.000	30	\$ 2.894.727	\$ 12.190	2003	53,07	1969	0,11
1-oct-70	31-oct-70	\$ 6.000	31	\$ 2.894.727	\$ 12.596	2003	53,07	1969	0,11
1-nov-70	30-nov-70	\$ 6.000	30	\$ 2.894.727	\$ 12.190	2003	53,07	1969	0,11
1-dic-70	31-dic-70	\$ 6.000	31	\$ 2.894.727	\$ 12.596	2003	53,07	1969	0,11
1-ene-71	31-ene-71	\$ 7.140	31	\$ 3.157.665	\$ 13.741	2003	53,07	1970	0,12
1-feb-71	28-feb-71	\$ 13.720	28	\$ 6.067.670	\$ 23.848	2003	53,07	1970	0,12
1-mar-71	31-mar-71	\$ 6.580	31	\$ 2.910.005	\$ 12.663	2003	53,07	1970	0,12
1-abr-71	30-abr-71	\$ 6.580	30	\$ 2.910.005	\$ 12.254	2003	53,07	1970	0,12
1-may-71	31-may-71	\$ 6.580	31	\$ 2.910.005	\$ 12.663	2003	53,07	1970	0,12
1-jun-71	30-jun-71	\$ 6.580	30	\$ 2.910.005	\$ 12.254	2003	53,07	1970	0,12
1-jul-71	31-jul-71	\$ 6.580	31	\$ 2.910.005	\$ 12.663	2003	53,07	1970	0,12
1-ago-71	31-ago-71	\$ 6.580	31	\$ 2.910.005	\$ 12.663	2003	53,07	1970	0,12
1-sep-71	30-sep-71	\$ 6.580	26	\$ 2.910.005	\$ 10.620	2003	53,07	1970	0,12
1-oct-71	31-oct-71	\$ 2.663	21	\$ 1.177.712	\$ 3.472	2003	53,07	1970	0,12
1-nov-71	30-nov-71	\$ 4.003	30	\$ 1.770.327	\$ 7.455	2003	53,07	1970	0,12
1-dic-71	31-dic-71	\$ 4.003	31	\$ 1.770.327	\$ 7.704	2003	53,07	1970	0,12
1-ene-72	31-ene-72	\$ 4.003	31	\$ 1.517.423	\$ 6.603	2003	53,07	1971	0,14
1-feb-72	29-feb-72	\$ 4.003	29	\$ 1.517.423	\$ 6.177	2003	53,07	1971	0,14
1-mar-72	31-mar-72	\$ 4.003	31	\$ 1.517.423	\$ 6.603	2003	53,07	1971	0,14
1-abr-72	30-abr-72	\$ 4.003	30	\$ 1.517.423	\$ 6.390	2003	53,07	1971	0,14
1-may-72	31-may-72	\$ 4.003	31	\$ 1.517.423	\$ 6.603	2003	53,07	1971	0,14
1-jun-72	30-jun-72	\$ 4.003	30	\$ 1.517.423	\$ 6.390	2003	53,07	1971	0,14
1-jul-72	31-jul-72	\$ 4.003	31	\$ 1.517.423	\$ 6.603	2003	53,07	1971	0,14
1-ago-72	31-ago-72	\$ 4.003	31	\$ 1.517.423	\$ 6.603	2003	53,07	1971	0,14
1-sep-72	30-sep-72	\$ 4.003	30	\$ 1.517.423	\$ 6.390	2003	53,07	1971	0,14
1-oct-72	31-oct-72	\$ 4.003	31	\$ 1.517.423	\$ 6.603	2003	53,07	1971	0,14
1-nov-72	30-nov-72	\$ 4.003	30	\$ 1.517.423	\$ 6.390	2003	53,07	1971	0,14
1-dic-72	31-dic-72	\$ 4.003	31	\$ 1.517.423	\$ 6.603	2003	53,07	1971	0,14
1-ene-73	31-ene-73	\$ 4.003	31	\$ 1.327.745	\$ 5.778	2003	53,07	1972	0,16
1-feb-73	28-feb-73	\$ 4.003	28	\$ 1.327.745	\$ 5.219	2003	53,07	1972	0,16
1-mar-73	31-mar-73	\$ 4.003	31	\$ 1.327.745	\$ 5.778	2003	53,07	1972	0,16

1-abr-73	30-abr-73	\$ 4.003	30	\$ 1.327.745	\$ 5.591	2003	53,07	1972	0,16
1-may-73	31-may-73	\$ 4.003	31	\$ 1.327.745	\$ 5.778	2003	53,07	1972	0,16
1-jun-73	30-jun-73	\$ 5.376	30	\$ 1.783.152	\$ 7.509	2003	53,07	1972	0,16
1-jul-73	31-jul-73	\$ 10.748	31	\$ 3.564.977	\$ 15.513	2003	53,07	1972	0,16
1-ago-73	31-ago-73	\$ 9.680	5	\$ 3.210.735	\$ 2.253	2003	53,07	1972	0,16
1-sep-73	30-sep-73					2003	53,07	1972	0,16
1-oct-73	31-oct-73					2003	53,07	1972	0,16
1-nov-73	30-nov-73					2003	53,07	1972	0,16
1-dic-73	31-dic-73					2003	53,07	1972	0,16
1-ene-74	31-ene-74					2003	53,07	1973	0,19
1-feb-74	28-feb-74					2003	53,07	1973	0,19
1-mar-74	31-mar-74					2003	53,07	1973	0,19
1-abr-74	30-abr-74					2003	53,07	1973	0,19
1-may-74	31-may-74					2003	53,07	1973	0,19
1-jun-74	30-jun-74					2003	53,07	1973	0,19
1-jul-74	31-jul-74					2003	53,07	1973	0,19
1-ago-74	31-ago-74					2003	53,07	1973	0,19
1-sep-74	30-sep-74					2003	53,07	1973	0,19
1-oct-74	31-oct-74	\$ 11.132	16	\$ 3.109.343	\$ 6.983	2003	53,07	1973	0,19
1-nov-74	30-nov-74	\$ 11.132	30	\$ 3.109.343	\$ 13.094	2003	53,07	1973	0,19
1-dic-74	31-dic-74	\$ 11.132	31	\$ 3.109.343	\$ 13.530	2003	53,07	1973	0,19
1-ene-75	31-ene-75	\$ 13.023	31	\$ 2.764.522	\$ 12.030	2003	53,07	1974	0,25
1-feb-75	28-feb-75	\$ 13.023	28	\$ 2.764.522	\$ 10.866	2003	53,07	1974	0,25
1-mar-75	31-mar-75	\$ 13.023	31	\$ 2.764.522	\$ 12.030	2003	53,07	1974	0,25
1-abr-75	30-abr-75	\$ 13.023	30	\$ 2.764.522	\$ 11.642	2003	53,07	1974	0,25
1-may-75	31-may-75	\$ 13.023	31	\$ 2.764.522	\$ 12.030	2003	53,07	1974	0,25
1-jun-75	30-jun-75	\$ 13.023	30	\$ 2.764.522	\$ 11.642	2003	53,07	1974	0,25
1-jul-75	31-jul-75	\$ 13.023	31	\$ 2.764.522	\$ 12.030	2003	53,07	1974	0,25
1-ago-75	31-ago-75	\$ 15.844	31	\$ 3.363.364	\$ 14.636	2003	53,07	1974	0,25
1-sep-75	30-sep-75	\$ 15.844	30	\$ 3.363.364	\$ 14.164	2003	53,07	1974	0,25
1-oct-75	31-oct-75	\$ 15.844	5	\$ 3.363.364	\$ 2.361	2003	53,07	1974	0,25
1-nov-75	30-nov-75					2003	53,07	1974	0,25
1-dic-75	31-dic-75					2003	53,07	1974	0,25
1-ene-76	31-ene-76					2003	53,07	1975	0,29

1-feb-76	29-feb-76	\$ 12.535	19	\$ 2.293.905	\$ 6.118	2003	53,07	1975	0,29
1-mar-76	31-mar-76	\$ 12.535	31	\$ 2.293.905	\$ 9.982	2003	53,07	1975	0,29
1-abr-76	30-abr-76	\$ 12.535	30	\$ 2.293.905	\$ 9.660	2003	53,07	1975	0,29
1-may-76	31-may-76	\$ 12.535	31	\$ 2.293.905	\$ 9.982	2003	53,07	1975	0,29
1-jun-76	30-jun-76	\$ 12.535	30	\$ 2.293.905	\$ 9.660	2003	53,07	1975	0,29
1-jul-76	31-jul-76	\$ 12.535	31	\$ 2.293.905	\$ 9.982	2003	53,07	1975	0,29
1-ago-76	31-ago-76	\$ 12.535	31	\$ 2.293.905	\$ 9.982	2003	53,07	1975	0,29
1-sep-76	30-sep-76	\$ 12.535	30	\$ 2.293.905	\$ 9.660	2003	53,07	1975	0,29
1-oct-76	31-oct-76	\$ 12.535	31	\$ 2.293.905	\$ 9.982	2003	53,07	1975	0,29
1-nov-76	30-nov-76	\$ 12.535	30	\$ 2.293.905	\$ 9.660	2003	53,07	1975	0,29
1-dic-76	31-dic-76	\$ 12.535	26	\$ 2.293.905	\$ 8.372	2003	53,07	1975	0,29
1-ene-77	31-ene-77					2003	53,07	1976	0,36
1-feb-77	28-feb-77	\$ 1.440	27	\$ 212.280	\$ 805	2003	53,07	1976	0,36
1-mar-77	31-mar-77	\$ 1.440	31	\$ 212.280	\$ 924	2003	53,07	1976	0,36
1-abr-77	30-abr-77	\$ 1.440	30	\$ 212.280	\$ 894	2003	53,07	1976	0,36
1-may-77	31-may-77	\$ 1.440	31	\$ 212.280	\$ 924	2003	53,07	1976	0,36
1-jun-77	30-jun-77	\$ 1.440	30	\$ 212.280	\$ 894	2003	53,07	1976	0,36
1-jul-77	31-jul-77	\$ 1.440	31	\$ 212.280	\$ 924	2003	53,07	1976	0,36
1-ago-77	31-ago-77	\$ 1.440	31	\$ 212.280	\$ 924	2003	53,07	1976	0,36
1-sep-77	30-sep-77	\$ 1.440	30	\$ 212.280	\$ 894	2003	53,07	1976	0,36
1-oct-77	31-oct-77	\$ 1.440	31	\$ 212.280	\$ 924	2003	53,07	1976	0,36
1-nov-77	30-nov-77	\$ 1.440	30	\$ 212.280	\$ 894	2003	53,07	1976	0,36
1-dic-77	31-dic-77	\$ 1.440	20	\$ 212.280	\$ 596	2003	53,07	1976	0,36
1-ene-78	31-ene-78					2003	53,07	1977	0,47
1-feb-78	28-feb-78					2003	53,07	1977	0,47
1-mar-78	31-mar-78					2003	53,07	1977	0,47
1-abr-78	30-abr-78					2003	53,07	1977	0,47
1-may-78	31-may-78					2003	53,07	1977	0,47
1-jun-78	30-jun-78					2003	53,07	1977	0,47
1-jul-78	31-jul-78					2003	53,07	1977	0,47
1-ago-78	31-ago-78					2003	53,07	1977	0,47
1-sep-78	30-sep-78					2003	53,07	1977	0,47
1-oct-78	31-oct-78					2003	53,07	1977	0,47
1-nov-78	30-nov-78					2003	53,07	1977	0,47

1-dic-78	31-dic-78					2003	53,07	1977	0,47
1-ene-79	31-ene-79					2003	53,07	1978	0,56
1-feb-79	28-feb-79					2003	53,07	1978	0,56
1-mar-79	31-mar-79	\$ 3.450	31	\$ 326.949	\$ 1.423	2003	53,07	1978	0,56
1-abr-79	30-abr-79	\$ 3.450	30	\$ 326.949	\$ 1.377	2003	53,07	1978	0,56
1-may-79	31-may-79	\$ 3.450	31	\$ 326.949	\$ 1.423	2003	53,07	1978	0,56
1-jun-79	30-jun-79	\$ 3.450	30	\$ 326.949	\$ 1.377	2003	53,07	1978	0,56
1-jul-79	31-jul-79					2003	53,07	1978	0,56
1-ago-79	31-ago-79	\$ 3.450	31	\$ 326.949	\$ 1.423	2003	53,07	1978	0,56
1-sep-79	30-sep-79	\$ 3.450	30	\$ 326.949	\$ 1.377	2003	53,07	1978	0,56
1-oct-79	31-oct-79	\$ 3.450	31	\$ 326.949	\$ 1.423	2003	53,07	1978	0,56
1-nov-79	30-nov-79	\$ 3.450	30	\$ 326.949	\$ 1.377	2003	53,07	1978	0,56
1-dic-79	31-dic-79					2003	53,07	1978	0,56
1-ene-80	31-ene-80					2003	53,07	1979	0,72
1-feb-80	29-feb-80					2003	53,07	1979	0,72
1-mar-80	31-mar-80	\$ 4.500	31	\$ 331.688	\$ 1.443	2003	53,07	1979	0,72
1-abr-80	30-abr-80	\$ 4.500	30	\$ 331.688	\$ 1.397	2003	53,07	1979	0,72
1-may-80	31-may-80	\$ 4.500	31	\$ 331.688	\$ 1.443	2003	53,07	1979	0,72
1-jun-80	30-jun-80	\$ 4.500	30	\$ 331.688	\$ 1.397	2003	53,07	1979	0,72
1-jul-80	31-jul-80					2003	53,07	1979	0,72
1-ago-80	31-ago-80					2003	53,07	1979	0,72
1-sep-80	30-sep-80					2003	53,07	1979	0,72
1-oct-80	31-oct-80					2003	53,07	1979	0,72
1-nov-80	30-nov-80					2003	53,07	1979	0,72
1-dic-80	31-dic-80					2003	53,07	1979	0,72
1-ene-81	31-ene-81					2003	53,07	1980	0,90
1-feb-81	28-feb-81					2003	53,07	1980	0,90
1-mar-81	31-mar-81					2003	53,07	1980	0,90
1-abr-81	30-abr-81					2003	53,07	1980	0,90
1-may-81	31-may-81					2003	53,07	1980	0,90
1-jun-81	30-jun-81					2003	53,07	1980	0,90
1-jul-81	31-jul-81					2003	53,07	1980	0,90
1-ago-81	31-ago-81					2003	53,07	1980	0,90
1-sep-81	30-sep-81					2003	53,07	1980	0,90

1-oct-81	31-oct-81					2003	53,07	1980	0,90
1-nov-81	30-nov-81					2003	53,07	1980	0,90
1-dic-81	31-dic-81					2003	53,07	1980	0,90
1-ene-82	31-ene-82					2003	53,07	1981	1,14
1-feb-82	28-feb-82					2003	53,07	1981	1,14
1-mar-82	31-mar-82					2003	53,07	1981	1,14
1-abr-82	30-abr-82					2003	53,07	1981	1,14
1-may-82	31-may-82					2003	53,07	1981	1,14
1-jun-82	30-jun-82					2003	53,07	1981	1,14
1-jul-82	31-jul-82					2003	53,07	1981	1,14
1-ago-82	31-ago-82					2003	53,07	1981	1,14
1-sep-82	30-sep-82					2003	53,07	1981	1,14
1-oct-82	31-oct-82					2003	53,07	1981	1,14
1-nov-82	30-nov-82	\$ 7.410	1	\$ 344.955	\$ 48	2003	53,07	1981	1,14
1-dic-82	31-dic-82	\$ 7.410	31	\$ 344.955	\$ 1.501	2003	53,07	1981	1,14
1-ene-83	31-ene-83	\$ 7.410	31	\$ 278.900	\$ 1.214	2003	53,07	1982	1,41
1-feb-83	28-feb-83	\$ 9.261	28	\$ 348.568	\$ 1.370	2003	53,07	1982	1,41
1-mar-83	31-mar-83	\$ 9.261	31	\$ 348.568	\$ 1.517	2003	53,07	1982	1,41
1-abr-83	30-abr-83	\$ 9.261	30	\$ 348.568	\$ 1.468	2003	53,07	1982	1,41
1-may-83	31-may-83	\$ 9.261	31	\$ 348.568	\$ 1.517	2003	53,07	1982	1,41
1-jun-83	30-jun-83	\$ 9.261	30	\$ 348.568	\$ 1.468	2003	53,07	1982	1,41
1-jul-83	31-jul-83	\$ 9.261	31	\$ 348.568	\$ 1.517	2003	53,07	1982	1,41
1-ago-83	31-ago-83	\$ 9.261	31	\$ 348.568	\$ 1.517	2003	53,07	1982	1,41
1-sep-83	30-sep-83	\$ 9.261	30	\$ 348.568	\$ 1.468	2003	53,07	1982	1,41
1-oct-83	31-oct-83	\$ 9.261	31	\$ 348.568	\$ 1.517	2003	53,07	1982	1,41
1-nov-83	30-nov-83	\$ 9.261	31	\$ 348.568	\$ 1.517	2003	53,07	1982	1,41
1-dic-83	31-dic-83	\$ 9.261	31	\$ 348.568	\$ 1.517	2003	53,07	1982	1,41
1-ene-84	31-ene-84	\$ 11.298	31	\$ 363.385	\$ 1.581	2003	53,07	1983	1,65
1-feb-84	29-feb-84	\$ 11.298	29	\$ 363.385	\$ 1.479	2003	53,07	1983	1,65
1-mar-84	31-mar-84	\$ 22.596	31	\$ 726.770	\$ 3.163	2003	53,07	1983	1,65
1-abr-84	30-abr-84	\$ 22.596	30	\$ 726.770	\$ 3.061	2003	53,07	1983	1,65
1-may-84	31-may-84	\$ 22.596	31	\$ 726.770	\$ 3.163	2003	53,07	1983	1,65
1-jun-84	30-jun-84	\$ 22.596	30	\$ 726.770	\$ 3.061	2003	53,07	1983	1,65
1-jul-84	31-jul-84	\$ 11.298	31	\$ 363.385	\$ 1.581	2003	53,07	1983	1,65

1-ago-84	31-ago-84	\$ 22.596	31	\$ 726.770	\$ 3.163	2003	53,07	1983	1,65
1-sep-84	30-sep-84	\$ 22.596	30	\$ 726.770	\$ 3.061	2003	53,07	1983	1,65
1-oct-84	31-oct-84	\$ 22.596	31	\$ 726.770	\$ 3.163	2003	53,07	1983	1,65
1-nov-84	30-nov-84	\$ 22.596	31	\$ 726.770	\$ 3.163	2003	53,07	1983	1,65
1-dic-84	31-dic-84	\$ 11.298	31	\$ 363.385	\$ 1.581	2003	53,07	1983	1,65
1-ene-85	31-ene-85	\$ 13.558	31	\$ 368.986	\$ 1.606	2003	53,07	1984	1,95
1-feb-85	28-feb-85	\$ 13.558	28	\$ 368.986	\$ 1.450	2003	53,07	1984	1,95
1-mar-85	31-mar-85	\$ 27.116	31	\$ 737.972	\$ 3.211	2003	53,07	1984	1,95
1-abr-85	30-abr-85	\$ 27.116	30	\$ 737.972	\$ 3.108	2003	53,07	1984	1,95
1-may-85	31-may-85	\$ 27.116	31	\$ 737.972	\$ 3.211	2003	53,07	1984	1,95
1-jun-85	30-jun-85	\$ 27.116	30	\$ 737.972	\$ 3.108	2003	53,07	1984	1,95
1-jul-85	31-jul-85	\$ 13.558	31	\$ 368.986	\$ 1.606	2003	53,07	1984	1,95
1-ago-85	31-ago-85	\$ 13.558	31	\$ 368.986	\$ 1.606	2003	53,07	1984	1,95
1-sep-85	30-sep-85	\$ 13.558	30	\$ 368.986	\$ 1.554	2003	53,07	1984	1,95
1-oct-85	31-oct-85	\$ 13.558	31	\$ 368.986	\$ 1.606	2003	53,07	1984	1,95
1-nov-85	30-nov-85	\$ 13.558	31	\$ 368.986	\$ 1.606	2003	53,07	1984	1,95
1-dic-85	31-dic-85	\$ 13.558	31	\$ 368.986	\$ 1.606	2003	53,07	1984	1,95
1-ene-86	31-ene-86	\$ 16.811	31	\$ 374.857	\$ 1.631	2003	53,07	1985	2,38
1-feb-86	28-feb-86	\$ 16.811	28	\$ 374.857	\$ 1.473	2003	53,07	1985	2,38
1-mar-86	31-mar-86	\$ 16.811	31	\$ 374.857	\$ 1.631	2003	53,07	1985	2,38
1-abr-86	30-abr-86	\$ 16.811	30	\$ 374.857	\$ 1.579	2003	53,07	1985	2,38
1-may-86	31-may-86	\$ 16.811	31	\$ 374.857	\$ 1.631	2003	53,07	1985	2,38
1-jun-86	30-jun-86	\$ 16.811	30	\$ 374.857	\$ 1.579	2003	53,07	1985	2,38
1-jul-86	31-jul-86	\$ 16.811	31	\$ 374.857	\$ 1.631	2003	53,07	1985	2,38
1-ago-86	31-ago-86	\$ 16.811	31	\$ 374.857	\$ 1.631	2003	53,07	1985	2,38
1-sep-86	30-sep-86	\$ 16.811	30	\$ 374.857	\$ 1.579	2003	53,07	1985	2,38
1-oct-86	31-oct-86	\$ 16.811	31	\$ 374.857	\$ 1.631	2003	53,07	1985	2,38
1-nov-86	30-nov-86	\$ 16.811	31	\$ 374.857	\$ 1.631	2003	53,07	1985	2,38
1-dic-86	31-dic-86	\$ 16.811	31	\$ 374.857	\$ 1.631	2003	53,07	1985	2,38
1-ene-87	31-ene-87	\$ 20.510	31	\$ 377.939	\$ 1.645	2003	53,07	1986	2,88
1-feb-87	28-feb-87	\$ 20.510	28	\$ 377.939	\$ 1.485	2003	53,07	1986	2,88
1-mar-87	31-mar-87	\$ 20.510	31	\$ 377.939	\$ 1.645	2003	53,07	1986	2,88
1-abr-87	30-abr-87	\$ 20.510	30	\$ 377.939	\$ 1.592	2003	53,07	1986	2,88
1-may-87	31-may-87	\$ 20.510	31	\$ 377.939	\$ 1.645	2003	53,07	1986	2,88

1-jun-87	30-jun-87	\$ 20.510	30	\$ 377.939	\$ 1.592	2003	53,07	1986	2,88
1-jul-87	31-jul-87	\$ 20.510	31	\$ 377.939	\$ 1.645	2003	53,07	1986	2,88
1-ago-87	31-ago-87	\$ 20.510	31	\$ 377.939	\$ 1.645	2003	53,07	1986	2,88
1-sep-87	30-sep-87	\$ 20.510	1	\$ 377.939	\$ 53	2003	53,07	1986	2,88
1-oct-87	31-oct-87					2003	53,07	1986	2,88
1-nov-87	30-nov-87					2003	53,07	1986	2,88
1-dic-87	31-dic-87					2003	53,07	1986	2,88
1-ene-88	31-ene-88					2003	53,07	1987	3,58
1-feb-88	29-feb-88					2003	53,07	1987	3,58
1-mar-88	31-mar-88					2003	53,07	1987	3,58
1-abr-88	30-abr-88					2003	53,07	1987	3,58
1-may-88	31-may-88					2003	53,07	1987	3,58
1-jun-88	30-jun-88					2003	53,07	1987	3,58
1-jul-88	31-jul-88					2003	53,07	1987	3,58
1-ago-88	31-ago-88					2003	53,07	1987	3,58
1-sep-88	30-sep-88					2003	53,07	1987	3,58
1-oct-88	31-oct-88					2003	53,07	1987	3,58
1-nov-88	30-nov-88					2003	53,07	1987	3,58
1-dic-88	31-dic-88					2003	53,07	1987	3,58
1-ene-89	31-ene-89					2003	53,07	1988	4,58
1-feb-89	28-feb-89					2003	53,07	1988	4,58
1-mar-89	31-mar-89					2003	53,07	1988	4,58
1-abr-89	30-abr-89					2003	53,07	1988	4,58
1-may-89	31-may-89					2003	53,07	1988	4,58
1-jun-89	30-jun-89					2003	53,07	1988	4,58
1-jul-89	31-jul-89					2003	53,07	1988	4,58
1-ago-89	31-ago-89					2003	53,07	1988	4,58
1-sep-89	30-sep-89					2003	53,07	1988	4,58
1-oct-89	31-oct-89					2003	53,07	1988	4,58
1-nov-89	30-nov-89					2003	53,07	1988	4,58
1-dic-89	31-dic-89					2003	53,07	1988	4,58
1-ene-90	31-ene-90					2003	53,07	1989	5,78
1-feb-90	28-feb-90					2003	53,07	1989	5,78
1-mar-90	31-mar-90					2003	53,07	1989	5,78

1-abr-90	30-abr-90					2003	53,07	1989	5,78
1-may-90	31-may-90					2003	53,07	1989	5,78
1-jun-90	30-jun-90					2003	53,07	1989	5,78
1-jul-90	31-jul-90					2003	53,07	1989	5,78
1-ago-90	31-ago-90					2003	53,07	1989	5,78
1-sep-90	30-sep-90					2003	53,07	1989	5,78
1-oct-90	31-oct-90					2003	53,07	1989	5,78
1-nov-90	30-nov-90					2003	53,07	1989	5,78
1-dic-90	31-dic-90					2003	53,07	1989	5,78
1-ene-91	31-ene-91					2003	53,07	1990	7,65
1-feb-91	28-feb-91					2003	53,07	1990	7,65
1-mar-91	31-mar-91					2003	53,07	1990	7,65
1-abr-91	30-abr-91					2003	53,07	1990	7,65
1-may-91	31-may-91					2003	53,07	1990	7,65
1-jun-91	30-jun-91					2003	53,07	1990	7,65
1-jul-91	31-jul-91					2003	53,07	1990	7,65
1-ago-91	31-ago-91					2003	53,07	1990	7,65
1-sep-91	30-sep-91					2003	53,07	1990	7,65
1-oct-91	31-oct-91					2003	53,07	1990	7,65
1-nov-91	30-nov-91					2003	53,07	1990	7,65
1-dic-91	31-dic-91					2003	53,07	1990	7,65
1-ene-92	31-ene-92					2003	53,07	1991	9,70
1-feb-92	29-feb-92					2003	53,07	1991	9,70
1-mar-92	31-mar-92					2003	53,07	1991	9,70
1-abr-92	30-abr-92					2003	53,07	1991	9,70
1-may-92	31-may-92					2003	53,07	1991	9,70
1-jun-92	30-jun-92					2003	53,07	1991	9,70
1-jul-92	31-jul-92					2003	53,07	1991	9,70
1-ago-92	31-ago-92					2003	53,07	1991	9,70
1-sep-92	30-sep-92					2003	53,07	1991	9,70
1-oct-92	31-oct-92					2003	53,07	1991	9,70
1-nov-92	30-nov-92					2003	53,07	1991	9,70
1-dic-92	31-dic-92					2003	53,07	1991	9,70
1-ene-93	31-ene-93					2003	53,07	1992	12,14

1-feb-93	28-feb-93					2003	53,07	1992	12,14
1-mar-93	31-mar-93					2003	53,07	1992	12,14
1-abr-93	30-abr-93					2003	53,07	1992	12,14
1-may-93	31-may-93					2003	53,07	1992	12,14
1-jun-93	30-jun-93					2003	53,07	1992	12,14
1-jul-93	31-jul-93					2003	53,07	1992	12,14
1-ago-93	31-ago-93					2003	53,07	1992	12,14
1-sep-93	30-sep-93					2003	53,07	1992	12,14
1-oct-93	31-oct-93					2003	53,07	1992	12,14
1-nov-93	30-nov-93					2003	53,07	1992	12,14
1-dic-93	31-dic-93					2003	53,07	1992	12,14
1-ene-94	31-ene-94					2003	53,07	1993	14,89
1-feb-94	28-feb-94					2003	53,07	1993	14,89
1-mar-94	31-mar-94					2003	53,07	1993	14,89
1-abr-94	30-abr-94					2003	53,07	1993	14,89
1-may-94	31-may-94					2003	53,07	1993	14,89
1-jun-94	30-jun-94					2003	53,07	1993	14,89
1-jul-94	31-jul-94					2003	53,07	1993	14,89
1-ago-94	31-ago-94					2003	53,07	1993	14,89
1-sep-94	30-sep-94					2003	53,07	1993	14,89
1-oct-94	31-oct-94					2003	53,07	1993	14,89
1-nov-94	30-nov-94					2003	53,07	1993	14,89
1-dic-94	31-dic-94					2003	53,07	1993	14,89
1-ene-95	31-ene-95					2003	53,07	1994	18,25
1-feb-95	28-feb-95					2003	53,07	1994	18,25
1-mar-95	31-mar-95					2003	53,07	1994	18,25
1-abr-95	30-abr-95					2003	53,07	1994	18,25
1-may-95	31-may-95					2003	53,07	1994	18,25
1-jun-95	30-jun-95					2003	53,07	1994	18,25
1-jul-95	31-jul-95					2003	53,07	1994	18,25
1-ago-95	31-ago-95					2003	53,07	1994	18,25
1-sep-95	30-sep-95					2003	53,07	1994	18,25
1-oct-95	31-oct-95					2003	53,07	1994	18,25
1-nov-95	30-nov-95	\$ 59.446	15	\$ 172.866	\$ 364	2003	53,07	1994	18,25

1-dic-95	31-dic-95	\$ 118.933	30	\$ 345.851	\$ 1.456	2003	53,07	1994	18,25
1-ene-96	31-ene-96	\$ 142.125	30	\$ 345.990	\$ 1.457	2003	53,07	1995	21,80
1-feb-96	29-feb-96					2003	53,07	1995	21,80
1-mar-96	31-mar-96					2003	53,07	1995	21,80
1-abr-96	30-abr-96					2003	53,07	1995	21,80
1-may-96	31-may-96					2003	53,07	1995	21,80
1-jun-96	30-jun-96					2003	53,07	1995	21,80
1-jul-96	31-jul-96					2003	53,07	1995	21,80
1-ago-96	31-ago-96					2003	53,07	1995	21,80
1-sep-96	30-sep-96					2003	53,07	1995	21,80
1-oct-96	31-oct-96					2003	53,07	1995	21,80
1-nov-96	30-nov-96					2003	53,07	1995	21,80
1-dic-96	31-dic-96					2003	53,07	1995	21,80
1-ene-97	31-ene-97					2003	53,07	1996	26,52
1-feb-97	28-feb-97					2003	53,07	1996	26,52
1-mar-97	31-mar-97					2003	53,07	1996	26,52
1-abr-97	30-abr-97					2003	53,07	1996	26,52
1-may-97	31-may-97					2003	53,07	1996	26,52
1-jun-97	30-jun-97					2003	53,07	1996	26,52
1-jul-97	31-jul-97					2003	53,07	1996	26,52
1-ago-97	31-ago-97					2003	53,07	1996	26,52
1-sep-97	30-sep-97	\$ 172.005	30	\$ 344.205	\$ 1.449	2003	53,07	1996	26,52
1-oct-97	31-oct-97					2003	53,07	1996	26,52
1-nov-97	30-nov-97					2003	53,07	1996	26,52
1-dic-97	31-dic-97					2003	53,07	1996	26,52
1-ene-98	31-ene-98					2003	53,07	1997	31,21
1-feb-98	28-feb-98					2003	53,07	1997	31,21
1-mar-98	31-mar-98					2003	53,07	1997	31,21
1-abr-98	30-abr-98	\$ 204.000	30	\$ 346.885	\$ 1.461	2003	53,07	1997	31,21
1-may-98	31-may-98	\$ 204.000	31	\$ 346.885	\$ 1.509	2003	53,07	1997	31,21
1-jun-98	30-jun-98	\$ 204.000	30	\$ 346.885	\$ 1.461	2003	53,07	1997	31,21
1-jul-98	31-jul-98	\$ 204.000	31	\$ 346.885	\$ 1.509	2003	53,07	1997	31,21
1-ago-98	31-ago-98	\$ 204.000	31	\$ 346.885	\$ 1.509	2003	53,07	1997	31,21
1-sep-98	30-sep-98	\$ 204.000	30	\$ 346.885	\$ 1.461	2003	53,07	1997	31,21

1-oct-98	31-oct-98	\$ 204.000	31	\$ 346.885	\$ 1.509	2003	53,07	1997	31,21
1-nov-98	30-nov-98	\$ 204.000	30	\$ 346.885	\$ 1.461	2003	53,07	1997	31,21
1-dic-98	31-dic-98	\$ 204.000	31	\$ 346.885	\$ 1.509	2003	53,07	1997	31,21
1-ene-99	31-ene-99	\$ 236.460	31	\$ 344.562	\$ 1.499	2003	53,07	1998	36,42
1-feb-99	28-feb-99					2003	53,07	1998	36,42
1-mar-99	31-mar-99					2003	53,07	1998	36,42
1-abr-99	30-abr-99	\$ 236.460	30	\$ 344.562	\$ 1.451	2003	53,07	1998	36,42
1-may-99	31-may-99	\$ 236.460	31	\$ 344.562	\$ 1.499	2003	53,07	1998	36,42
1-jun-99	30-jun-99	\$ 236.460	30	\$ 344.562	\$ 1.451	2003	53,07	1998	36,42
1-jul-99	31-jul-99	\$ 236.460	31	\$ 344.562	\$ 1.499	2003	53,07	1998	36,42
1-ago-99	31-ago-99	\$ 236.460	31	\$ 344.562	\$ 1.499	2003	53,07	1998	36,42
1-sep-99	30-sep-99	\$ 236.460	30	\$ 344.562	\$ 1.451	2003	53,07	1998	36,42
1-oct-99	31-oct-99	\$ 236.460	31	\$ 344.562	\$ 1.499	2003	53,07	1998	36,42
1-nov-99	30-nov-99	\$ 236.460	30	\$ 344.562	\$ 1.451	2003	53,07	1998	36,42
1-dic-99	31-dic-99	\$ 236.460	31	\$ 344.562	\$ 1.499	2003	53,07	1998	36,42
1-ene-00	31-ene-00	\$ 260.106	31	\$ 346.917	\$ 1.510	2003	53,07	1999	39,79
1-feb-00	29-feb-00	\$ 260.100	29	\$ 346.909	\$ 1.412	2003	53,07	1999	39,79
1-mar-00	31-mar-00	\$ 260.100	31	\$ 346.909	\$ 1.510	2003	53,07	1999	39,79
1-abr-00	30-abr-00	\$ 260.100	30	\$ 346.909	\$ 1.461	2003	53,07	1999	39,79
1-may-00	31-may-00	\$ 260.100	31	\$ 346.909	\$ 1.510	2003	53,07	1999	39,79
1-jun-00	30-jun-00	\$ 260.100	30	\$ 346.909	\$ 1.461	2003	53,07	1999	39,79
1-jul-00	31-jul-00	\$ 260.100	31	\$ 346.909	\$ 1.510	2003	53,07	1999	39,79
1-ago-00	31-ago-00	\$ 260.100	31	\$ 346.909	\$ 1.510	2003	53,07	1999	39,79
1-sep-00	30-sep-00	\$ 260.100	30	\$ 346.909	\$ 1.461	2003	53,07	1999	39,79
1-oct-00	31-oct-00	\$ 260.100	31	\$ 346.909	\$ 1.510	2003	53,07	1999	39,79
1-nov-00	30-nov-00	\$ 260.100	30	\$ 346.909	\$ 1.461	2003	53,07	1999	39,79
1-dic-00	31-dic-00	\$ 260.100	31	\$ 346.909	\$ 1.510	2003	53,07	1999	39,79
1-ene-01	31-ene-01					2003	53,07	2000	43,27
1-feb-01	28-feb-01	\$ 286.000	28	\$ 350.775	\$ 1.379	2003	53,07	2000	43,27
1-mar-01	31-mar-01	\$ 286.000	31	\$ 350.775	\$ 1.526	2003	53,07	2000	43,27
1-abr-01	30-abr-01	\$ 286.000	30	\$ 350.775	\$ 1.477	2003	53,07	2000	43,27
1-may-01	31-may-01	\$ 286.000	31	\$ 350.775	\$ 1.526	2003	53,07	2000	43,27
1-jun-01	30-jun-01	\$ 286.000	30	\$ 350.775	\$ 1.477	2003	53,07	2000	43,27
1-jul-01	31-jul-01	\$ 286.000	31	\$ 350.775	\$ 1.526	2003	53,07	2000	43,27

1-ago-01	31-ago-01	\$ 286.000	31	\$ 350.775	\$ 1.526	2003	53,07	2000	43,27
1-sep-01	30-sep-01	\$ 286.000	30	\$ 350.775	\$ 1.477	2003	53,07	2000	43,27
1-oct-01	31-oct-01	\$ 286.000	31	\$ 350.775	\$ 1.526	2003	53,07	2000	43,27
1-nov-01	30-nov-01	\$ 286.000	30	\$ 350.775	\$ 1.477	2003	53,07	2000	43,27
1-dic-01	31-dic-01	\$ 286.000	31	\$ 350.775	\$ 1.526	2003	53,07	2000	43,27
1-ene-02	31-ene-02	\$ 309.000	21	\$ 352.053	\$ 1.038	2003	53,07	2001	46,58
1-feb-02	28-feb-02	\$ 400.400	28	\$ 456.188	\$ 1.793	2003	53,07	2001	46,58
1-mar-02	31-mar-02	\$ 309.000	31	\$ 352.053	\$ 1.532	2003	53,07	2001	46,58
1-abr-02	30-abr-02	\$ 309.000	30	\$ 352.053	\$ 1.483	2003	53,07	2001	46,58
1-may-02	31-may-02	\$ 309.000	31	\$ 352.053	\$ 1.532	2003	53,07	2001	46,58
1-jun-02	30-jun-02	\$ 309.000	30	\$ 352.053	\$ 1.483	2003	53,07	2001	46,58
1-jul-02	31-jul-02	\$ 309.000	31	\$ 352.053	\$ 1.532	2003	53,07	2001	46,58
1-ago-02	31-ago-02	\$ 309.000	31	\$ 352.053	\$ 1.532	2003	53,07	2001	46,58
1-sep-02	30-sep-02	\$ 309.000	30	\$ 352.053	\$ 1.483	2003	53,07	2001	46,58
1-oct-02	31-oct-02	\$ 309.000	31	\$ 352.053	\$ 1.532	2003	53,07	2001	46,58
1-nov-02	30-nov-02	\$ 309.000	30	\$ 352.053	\$ 1.483	2003	53,07	2001	46,58
1-dic-02	31-dic-02	\$ 309.000	31	\$ 352.053	\$ 1.532	2003	53,07	2001	46,58
1-ene-03	31-ene-03	\$ 332.000	31	\$ 353.587	\$ 1.539	2003	53,07	2002	49,83
1-feb-03	28-feb-03	\$ 332.000	28	\$ 353.587	\$ 1.390	2003	53,07	2002	49,83
1-mar-03	31-mar-03	\$ 332.000	31	\$ 353.587	\$ 1.539	2003	53,07	2002	49,83
1-abr-03	30-abr-03	\$ 332.000	30	\$ 353.587	\$ 1.489	2003	53,07	2002	49,83
1-may-03	31-may-03	\$ 332.000	31	\$ 353.587	\$ 1.539	2003	53,07	2002	49,83
1-jun-03	30-jun-03	\$ 332.000	30	\$ 353.587	\$ 1.489	2003	53,07	2002	49,83
1-jul-03	31-jul-03	\$ 332.000	31	\$ 353.587	\$ 1.539	2003	53,07	2002	49,83
1-ago-03	31-ago-03	\$ 332.000	31	\$ 353.587	\$ 1.539	2003	53,07	2002	49,83
1-sep-03	30-sep-03	\$ 332.000	30	\$ 353.587	\$ 1.489	2003	53,07	2002	49,83
1-oct-03	31-oct-03	\$ 332.000	31	\$ 353.587	\$ 1.539	2003	53,07	2002	49,83
1-nov-03	30-nov-03	\$ 332.000	30	\$ 353.587	\$ 1.489	2003	53,07	2002	49,83
1-dic-03	31-dic-03	\$ 332.000	31	\$ 353.587	\$ 1.539	2003	53,07	2002	49,83

TOTAL	
DÍAS	7124
TOTAL SEMANAS	1017,71

Ingreso Base de Liquidación -IBL-	\$ 1.079.792,83
Semanas Cotizadas	1.017,71
Tasa de reemplazo	75,00%

Valor pensión	\$ 809.845
---------------	------------

Así las cosas, se obtuvo un IBL de \$1.079.793 para el 1 de enero de 2004, sin embargo, debido a las semanas cotizadas, se aplicará una tasa de reemplazo del 75%, para una mesada inicial de \$809.485.

Debe resaltarse que, la prestación económica se causó con anterioridad al 31 de julio de 2011 y por un valor inferior a 3 salarios mínimos legales, por lo que, según el parágrafo 6 del Acto legislativo 01 de 2005, al demandante le asiste derecho a 14 mesadas pensionales.

Antes de proceder a calcular el retroactivo pensional, es indispensable analizar la excepción de prescripción formulada por COLPENSIONES, para lo cual, se recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se hace exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

El artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el mismo texto alusivo a la interrupción de la prescripción.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que esta Colegiatura comparte, el análisis consonante de los preceptos lleva a concluir que únicamente es posible interrumpir la prescripción una sola vez (sentencia de 21 de febrero de 2012, Radicado 41.908 y SL 374 de 12 febrero de 2020, Radicado 67.868).

De acuerdo a la prueba documental se tiene que: i) según las historias laborales arrimadas al plenario, la última semana cotizada del accionante, fue en el período 12/2003; ii) el actor cumplió 60 años de edad el 25 de febrero de 2002; iii) la

reclamación administrativa ante el otrora ISS hoy COLPENSIONES, fue presentada en el año 2010); iv) el ISS hoy COLPENSIONES mediante Resolución 018380 del 29 de septiembre de 2010, resolvió negativamente la solicitud; v) la demanda fue presentada en la oficina judicial, el día 18 de octubre de 2017.

En consecuencia, al haber causado los requisitos para la pensión desde el 1 de enero de 2004, y al no acreditarse más cotizaciones con posterioridad al lapso mencionado, el señor HERNÁN JAIME ECHEVERRI ARROYAVE, contaba con el término de tres años para elevar solicitud ante el fondo de pensiones, es decir hasta el 1 de enero de 2007, lo cual no aconteció, pues la reclamación presentada aconteció en el año 2010; aunado a ello, nuevamente demoró más de tres años en radicar la demanda, pues se realizó solo 7 año después de notificado el actor administrativo.

Así las cosas, está llamada a prosperar de manera parcial la excepción de prescripción, respecto a las mesadas pensionales generadas con anterioridad al 18 de octubre de 2014, esto es 3 años contados hacia atrás desde la presentación de la demanda.

Teniendo en cuenta todo lo ya analizado, esta Sala de Decisión obtuvo un valor de **\$204.354.294** por concepto de retroactivo pensional entre el 18 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2024:

Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Fracción días (14 días de octubre)	Total Retroactivo
2014	3,66%	3	\$ 1.214.106	\$566.583	\$ 4.208.901
2015	6,77%	14	\$ 1.258.543		\$ 17.619.602
2016	5,75%	14	\$ 1.343.746		\$ 18.812.444
2017	4,09%	14	\$ 1.421.011		\$ 19.894.154
2018	3,18%	14	\$ 1.479.131		\$ 20.707.834
2019	3,80%	14	\$ 1.526.167		\$ 21.366.338
2020	1,61%	14	\$ 1.584.162		\$ 22.178.268
2021	5,62%	14	\$ 1.609.667		\$ 22.535.338
2022	13,12%	14	\$ 1.700.130		\$ 23.801.820
2023	9,28%	14	\$ 1.923.187		\$ 26.924.618
2024		3	\$ 2.101.659		\$ 6.304.977
			TOTAL		\$ 204.354.294

Sobre este retroactivo, se autoriza a COLPENSIONES efectuar los descuentos en salud. Ello de acuerdo al artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y lo expuesto en reiteradas oportunidades por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recordando las sentencias SL 1195 de 2014; SL 9782 de 2014; SL 10143 de 2014; y SL 13547 de 2014.

Igualmente vale precisar que, con el fin de evitar el detrimento del valor de la moneda, el anterior valor deberá ser indexado al momento del pago efectivo.

A partir de abril de 2024, la entidad demandada deberá reconocer una mesada pensional por valor de **\$2.101.659**, sin perjuicio de los incrementos de ley.

Finalmente, se advierte que el pago de la prestación económica por parte de COLPENSIONES, se encuentra supeditada a la cancelación del cálculo actuarial por parte de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

DE LAS COSTAS.

Toda vez que la apoderada de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA desistió del recurso de apelación, y en vista que prosperaron los argumentos esbozados en la alzada por la parte actora, no habrá lugar a condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **Revocar parcialmente** el numeral tercero de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de

Medellín, que se revisa en apelación y consulta, en el sentido de declarar la existencia de diversas relaciones laborales entre la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y el señor JAIME ECHEVERRI ARROYAVE, cuyos extremos temporales son los siguientes:

Del 1 de marzo al 30 de junio de 1979; del 1 de agosto al 30 de noviembre de 1979; del 1 de marzo al 30 de junio de 1980; del 1 de marzo al 30 de junio de 1984; del 1 de agosto al 30 de noviembre de 1984; del 1 de marzo al 30 de junio de 1985; y del 30 de noviembre de 1982 al 1 de septiembre de 1987. Cada uno de ellos, con una remuneración del salario mínimo legal mensual vigente para cada año.

SEGUNDO: Modificar los numerales cuarto y quinto, de la sentencia analizada, ordenando a COLPENSIONES, adicionar en el cálculo actuarial en favor del señor JAIME ECHEVERRI ARROYAVE, y a cargo de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA de la siguiente manera:

1. En los periodos durante los cuales existió contrato de trabajo, ejerciendo la labor de docente hora cátedra, dicho cálculo, se efectuará conforme a los salarios mínimos de la época.
2. Se deberá tener en cuenta el lapso entre el 30 de noviembre de 1982 al 1 de septiembre de 1987.
3. Se hace hincapié, que los vínculos contractuales como docente horas catedra por los periodos 1 de marzo al 30 de junio de 1984, 1 de agosto al 30 de noviembre de 1984, y 1 de marzo al 30 de junio de 1985, son relaciones laborales diferentes, con remuneraciones independientes al vínculo declarado entre el 30 de noviembre de 1982 al 1 de septiembre de 1987, motivo por el cual, se tendrá en cuenta doble IBC, puntualmente para estos ciclos.

TERCERO: Revocar el numeral primero de la sentencia analizada, en el sentido de **Declarar** que el señor HERNÁN JAIME ECHEVERRY ARROYAVE es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100

de 1993, y como consecuencia de ello, le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Por lo anterior, se efectúan las siguientes

Condenas:

1. COLPENSIONES deberá pagar al demandante, la suma de **\$204.354.294** por concepto de retroactivo pensional entre el 18 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2024, valor que será indexado al momento del pago efectivo.
2. Sobre este retroactivo, se autoriza a COLPENSIONES efectuar los descuentos en salud.
3. A partir de abril de 2024, COLPENSIONES reconocerá 14 mesadas pensionales año, cada una de ellas por valor de \$2.101.659, sin perjuicio de los incrementos de ley.
4. Se advierte que el pago de la prestación económica por parte de COLPENSIONES, se encuentra supeditada a la cancelación del cálculo actuarial por parte de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **47be5ae0f4e6e851a5bc4fbe90142590a8d169f80c7591daba34c1cc75891ac7**

Documento generado en 13/03/2024 03:34:15 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>